



[:15]

Julio 2010

Más Estado y más sociedad civil

A lo largo de estos meses y conforme se disparaban las cifras del paro, los medios de comunicación iban desgranando los discursos sobre los que se construiría el consenso en torno a la crisis. Un consenso que, a modo de ataque preventivo, buscaba desactivar de antemano las respuestas ciudadanas que pudieran provocar los recortes sociales y laborales que ahora se tratan de imponer como salida a la crisis.

El relato imperante sobre la crisis apunta a que ésta es un anomalía producida por los excesos de un puñado de desalmados de avaricia desmedida a lomos de una economía financiera desbocada. Abuso y desenfreno que se ha extendido a todos los sectores y capas de la sociedad gracias a la accesibilidad del crédito y que ha hecho que todos vivamos por encima de nuestras posibilidades y seamos cómplices del desaguado. Según esta versión, la culpa de la crisis es de todos.

Cuando "viviásemos por encima de nuestras posibilidades" los vecinos y vecinas de Madrid teníamos que emplear hasta un 60% de sus ingresos en costear el acceso a una vivienda, derecho reconocido constitucionalmente. Muchas de las personas que, sin ir más lejos, forman parte de nuestras asociaciones vivían (y viven) con pensiones de 700 euros mensuales. Había en España 8 millones de pobres. Pero entonces no se nos hablaba de crisis.

En una primera fase se hablaba de la necesidad de "refundar el capitalismo", de "abrir un paréntesis en los mercados" para que la acción reguladora del Estado pusiera orden. Se inyectaron, a cargo del erario público y de manera incondicional, miles de millones de dólares y de euros para salvar los bancos. Después se olvidaron de refundar nada. El Estado debía intervenir, sí, pero para depositar en los bancos el dinero de los contribuyentes.

La crisis, sin embargo, no parecía detenerse, ni siquiera atenuarse. Y así, a los pocos días de denunciar una ofensiva especulativa de "los mercados", el Gobierno de España anunciaba drásticas medidas de ajuste que respondían, al fin, a las exigencias de los que apenas una semana antes eran especuladores que conspiraban contra la economía de nuestro país. Ahora, por culpa de los excesos del pasado y las presiones de los mercados nos toca apretarnos el cinturón. Con las reducciones salariales, la congelación de las pensiones, la paralización de las inversiones, los recortes sociales... se acabó la fiesta. La sombra de los cuatro millones de parados, sin embargo, es larga y la perspectiva de formar parte de ella nos hace a todos más "comprensivos" y resignados.

En la FRAVM entendemos que la crisis no es más que una tendencia propia de un sistema económico cuya dimensión crucial es el beneficio empresarial, no la satisfacción de las necesidades de la población. El aumento del paro y los recortes en el gasto público, los salarios y las pensiones no son más que correcciones periódicas de la marcha del sistema y momentos de restauración de las ganancias empresariales.

Rechazamos la política de "ahorro" y de contención del gasto público y exigimos la adopción de una política fiscal fuertemente progresiva que permita afrontar la inversión pública para el sostenimiento y extensión de los derechos sociales.

En lo que a nosotros respecta, trabajaremos en cada barrio para articular al tejido social en torno a la defensa de esta otra salida a la crisis: más participación, más democracia, mejor vertebración del tejido social, más recursos públicos, más equipamientos y más derechos sociales. Es decir, más Estado y más sociedad civil.

[: 15]
sumario

Julio 2010

Gaceta Vecinal



- 3. La FRAVM estrena cuaderno de ruta.
- 5. Presupuestos participativos en tiempo de crisis
- 6-7. La sanidad pública madrileña pierde pulso
- 8. Queremos rehabilitar, pero queremos cobrar
- 12. Huertos urbanos: agricultura comunitaria a pie de asfalto
- 14. El fantasma del campo de golf regresa a Tres Cantos
- 17. Las asociaciones de Usera sacan tarjeta roja al concejal del distrito
- 18-19. La FRAVM promueve la movilización ante los recortes sociales
- 20-21. Entrevista a Maribel Domèneq, portavoz de la Plataforma Salvem el Cabanyal de Valencia
- 22-25. 2.000 imágenes para celebrar una historia cargada de futuro
- 26-27. Ayuntamiento de Madrid: cinco Planes de Inversión culminados.

Publicación bimestral de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
C/ Bocángel, 2. 28028, Madrid
Tel: 91 725 29 09. Fax: 91 725 06 23
<http://www.aavvmadrid.org>
E-mail: fravm@aavvmadrid.org

CONSEJO DE REDACCIÓN: Nacho Murgui, Vicente Pérez, Isabel Rodríguez, M^a Carmen Lostal, Manuel Osuna, Carmen Míguez.

REDACCIÓN: Edurne Irigoien (fravmprensa@aavvmadrid.org) y Óscar Chaves: oscar.chaves@aavvmadrid.org

DISEÑO Y MAQUETA ORIGINAL: taller de diseño traficantes de sueños (taller@traficantes.net)

FOTOGRAFÍA PORTADA:

Olmo Calvo

IMPRESIÓN: Asetip.

DISTRIBUYE: Publigarma S.A.

DEPÓSITO LEGAL: M-24986-2006

> Boletín subvencionado por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.



La FRAVM estrena cuaderno de ruta

Revitalizar el movimiento vecinal para transformar Madrid. Ese es el norte del Plan Estratégico del que, tras dos años de intenso trabajo, se ha dotado la FRAVM para mejorar la sostenibilidad social y medioambiental de la región en un contexto marcado por la crisis económica. El nuevo cuaderno de ruta del movimiento vecinal aborda cuestiones de carácter organizativo y táctico pero, sobre todo, recoge los objetivos del movimiento en todos sus ámbitos de actuación y las propuestas de trabajo para materializarlos.

Las puertas del salón de actos del instituto Cervantes, situado en el madrileño barrio de Lavapiés, se abrieron de par en par el pasado 17 de marzo para acoger a más de un centenar de activistas de las asociaciones vecinales madrileñas. Todos ellos se habían dado cita para conocer y reconocer el fruto de dos años de intenso trabajo de análisis, reflexión, debate y elaboración de propuestas gracias al cual el movimiento vecinal madrileño se ha dotado de un plan estratégico para, en palabras de Vicente Pérez, de la Junta Directiva de la FRAVM, construir "una región a escala humana que refleje los intereses de la gente de los barrios populares" haciendo efectivo "el ejercicio de derechos sociales tales como la vivienda, la educación y la sanidad universal de carácter público y gratuito" construyendo, al tiempo, un tejido social "cuanto más vertebrado mejor".

El reto no es sencillo. Y es que "el movimiento vecinal no atraviesa sus mejores momentos", reconoció Pérez. Algunas de las causas de tal retroceso "nos son imputables"; otras, sin embargo, "afectan al conjunto de los movimientos sociales". "Afortunadamente –añadió– hay logros y conquistas que demuestran que el movimiento vecinal sigue siendo capaz de movilizar a la ciudadanía", haciendo referencia, entre otros, a las miles de firmas recogidas contra la tasa de la basura de Madrid, la paralización de la modificación del Plan General de Morata de Tajuña o al "ingente trabajo desplegado para desarrollar los Planes Especiales de Inversiones y Actuaciones, gracias a los cuales el Ayuntamiento de Madrid ha invertido centenares de millones de euros en los distritos más desfavorecidos".

Los problemas a enfrentar son "algunos que conocemos de antiguo, como la falta de equipamientos públicos y zonas verdes en los viejos y en los nuevos barrios, el difícil acceso a la vivienda..." y otros nuevos, como la integración de las



Auditorio del salón de actos del IES Cervantes, durante la presentación del plan.

personas inmigrantes. Las asociaciones vecinales, sin embargo, no están solas. "En la actualidad –subrayó Nacho Murgui, presidente de la Federación– ya no son los únicos agentes sociales radicados en los barrios", por lo que "tienen que establecer alianzas con otros colectivos para enfrentar con eficacia la complejidad de los problemas que hoy determinan la convivencia y la calidad de vida de la ciudadanía madrileña". Alianzas que "deberán tejer las asociaciones en sus barrios y la propia Federación a nivel regional con aquellas organizaciones con las que comparten objetivos", remató.

Los responsables de todas las áreas sectoriales de la Federación vecinal (participación ciudadana, convivencia, sanidad, urbanismo, vivienda, medio ambiente...) desgranaron los objetivos y las propuestas de trabajo consensua-

das. Todas las comisiones de trabajo, recordó Murgui, "deberán priorizar los objetivos y programar sus respectivas propuestas de actuación para la Asamblea general que la FRAVM celebrará en diciembre de 2010".

El plan de trabajo que determinará la actuación de la Federación vecinal los próximos dos años estará, en palabras de Murgui "indefectiblemente marcado por los recortes aplicados por las diferentes administraciones en términos de bienestar social y derechos de la ciudadanía. Son –añade– las circunstancias las que nos imponen priorizar aquellos aspectos del Plan Estratégico que hacen énfasis en la necesidad de articular al tejido social en torno a la defensa de los sectores más vulnerables de la población, de los derechos sociales y de la defensa de los servicios públicos".



Representantes de la FRAVM presentan las conclusiones del Plan Estratégico 2009-2012 de la organización.

Foto: Julio Robledo.

Foto: Óscar Chaves.

>> La FRAVM participó en la concentración que los sindicatos CC OO y UGT llevaron a cabo el 30 de junio en Madrid para poner de manifiesto su rechazo a la **reforma laboral** por cuanto permite un despido más fácil y barato, institucionaliza la temporalidad como vía de acceso al mercado de trabajo y cuestiona elementos fundamentales de la negociación colectiva.

>> Una decena de asociaciones vecinales constituyeron el pasado 1 de julio la **Comisión de Mayores** de la FRAVM, que centrará sus esfuerzos en la reforma de las pensiones, la aplicación de la Ley de Dependencia y en reforzar la convocatoria de la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Se volverá a reunir el 2 de septiembre en la sede de la FRAVM.

16 Planes para reequilibrar Madrid

Mitigar el desequilibrio social y territorial de Madrid incorporando a las asociaciones de vecinos en la toma de decisiones sobre la inversión pública destinada a 16 barrios desfavorecidos de la capital. Ese es el ambicioso objetivo de los Planes de Barrio 2009-2012 consensuados por la FRAVM y el Ayuntamiento de Madrid, un programa que, en apenas un año, se ha materializado en la ejecución de 617 acciones en materia de empleo, educación, servicios sociales, convivencia, cultura y seguridad.

"En este año de su puesta en marcha se ha producido un grado de cumplimiento de los planes muy aceptable y satisfactorio respecto a lo que estaba previsto". De esta manera resume el presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, el balance de las actuaciones promovidas durante el primer año de desarrollo de los Planes de Barrio, un programa que la Federación vecinal suscribió con el Ayuntamiento de Madrid el 24 de abril del pasado año y, gracias al cual, las asociaciones vecinales de algunos barrios desfavorecidos de la capital participan en la elección del destino de la inversión municipal dirigida a su territorio.

De acuerdo a un estudio elaborado por la Fundación de Estudios Ciudadanos, al menos 74 áreas de la capital necesitan inversiones públicas de forma urgente. "Echamos en falta –declaraba Murgui el día de la firma de los Planes– que este tipo de actuaciones, destinadas a reequilibrar el conjunto de la ciudad, no se extiendan a más barrios", pero "no podemos dejar de felicitarnos por un acuerdo que servirá para mejorar las condiciones de vida de unos barrios que sufren las consecuencias de una crisis permanente y estructural que ha dado lugar a la concentración y la persistencia de diversos problemas de carácter social: desescolarización, absentismo escolar, los mayores índices de desempleo, los menores niveles de renta y carencias dotacionales de todo tipo", concluía.

De las 697 actuaciones contempladas para el primer año de desarrollo de los Planes, se ejecutaron o iniciaron 617. "Los 16 barrios han superado el 80% de grado de cumplimiento de los planes diseñados específicamente para ellos", declaraba el delegado del área de Economía y Participación Ciudadana, Miguel Ángel Villanueva, durante una comparecencia pública con Nacho Murgui celebrada el pasado 5 de mayo, alcanzando La Elipa "cotas del 95,71%", y Fontarrón, Pozo-Entrevías, Lavapiés, Caño Roto, Pan Bendito, Villaverde Bajo, Triángulo del Agua, Orcasur, Meseta de Orcasitas y San Fermín más del 90%".

En este tiempo y gracias a los planes, se ha puesto en marcha un servicio de dinamizadores de empleo que actúan en los



Mujeres de Lavapiés participan en un taller de memoria.

Foto: Neves Prado.

16 barrios beneficiarios; se han creado dos nuevos centros municipales de mayores en el distrito Centro; se han incorporado dinamizadores vecinales en el Triángulo del Agua (Puente de Vallecas), Poblado A y B de Fuencarral y el PAU de Vallecas y se han llevado a cabo diferentes programas y acciones de integración en 14 barrios.

"Hay algunas medidas –señala Murgui– que aún no se han podido articular, como una comisión que haga un seguimiento de la situación de la educación en estos barrios compuesta por la FRAVM, el Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Educación de la Comunidad, ya que aún estamos esperando que se produzca algún tipo de respuesta por parte de esta última".

A pesar de ello, el balance global del desarrollo de los planes es, en palabras del representante vecinal, "positivo". "Los planes no recogen todo lo que necesitan nuestros barrios. No constituyen la solución definitiva a los problemas estructurales propios de este modelo de ciudad y de sociedad, ni a los problemas coyunturales de este periodo de crisis, pero –añade– indudablemente contienen medidas y oportunidades concretas que no podemos ni debemos dejar escapar".

"La participación ciudadana –concluye– aporta transparencia en la gestión de lo público y eficiencia en la asignación de recursos materiales, como han demostrado los Planes Especiales de Inversión y Actuación en los que participa el movimiento vecinal desde 1998 y, ahora, los planes de barrio que, en definitiva, responden a la misma filosofía: la de que las decisiones políticas tengan en cuenta cuáles son las necesidades más acuciantes de la ciudadanía definidas por la propia ciudadanía".

Homenaje a Juan Hoyas

Un sencillo monolito de piedra honrará, en los jardines de la colonia San Nicolás de Villaverde, el tesón ciudadano, el generoso compromiso y la memoria de nuestro querido y añorado compañero Juan Hoyas. Promovido por la Junta Municipal de Villaverde y el Área de Obras y Espacios Públicos, con el concurso de su asociación vecinal, el homenaje a Juan Hoyas congregará en octubre, como ya ocurriera en mayo, a sus allegados, a los camaradas y amigos metalúrgicos, del movimiento vecinal y de su organización política junto con los vecinos y vecinas de la colonia de sus desvelos.



>> Las organizaciones que el pasado mes de marzo participaron en la tercera edición de la **Convención de Movimientos Sociales** acordaron oponerse de manera coordinada y con todos los medios democráticos a su alcance al recorte de los derechos y libertades ciudadanas y defender, del mismo modo, la existencia y mejora de unos servicios públicos de gestión pública.

>> Preocupada por el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía como consecuencia de la recesión económica, la FRAVM ha creado el **Observatorio de la Crisis en los Barrios**, un "dispositivo de escucha" gracias al cual se elaborarán, periódicamente, informes sobre las consecuencias de la crisis en algunas de las zonas más desfavorecidas de la capital.

Presupuestos participativos en tiempo de crisis

Un modelo de gestión pública eficaz, transparente y democrática ha de establecer los cauces necesarios que propicien el intercambio y la participación entre ciudadanos y gobernantes. Son palabras de Alberto Ruiz-Gallardón recogidas en la presentación del Reglamento de Participación Ciudadana de la capital. Palabras que no se han traducido en hechos en la aprobación de los presupuestos municipales ni en el funcionamiento de los Consejos Territoriales. Obstruidos los cauces formales de participación, la FRAVM promueve un proceso de elaboración de presupuestos participativos desde abajo para determinar las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Antisociales, restrictivos y nada participativos. Así calificó a principios de año la FRAVM los presupuestos aprobados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para 2010. Las cuentas de este año registran una caída del 4,2% respecto al anterior. Una parte notable de este recorte presupuestario procede del capítulo de inversiones, principalmente de las referidas a nuevos equipamientos, lo que contrasta con el incremento, en un 24%, del dinero destinado al proyecto Madrid Río y con el mantenimiento de la inversión en las obras de reforma del palacio Cibeles, a las que se destinan más de 37 millones de euros.

"El Ayuntamiento de la capital hurtó, además, al proceso de elaboración de los presupuestos –denuncia M^a Carmen Lostal, de la comisión de Participación Ciudadana de la federación vecinal– el necesario debate, consulta y consenso para garantizar que el dinero público responda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, una legítima aspiración –añade– que, en época de crisis, debería adquirir la categoría de mandamiento para los gobernantes".

A la aprobación unilateral de los presupuestos, la FRAVM suma un balance del funcionamiento de los Consejos Territoriales –espacios creados para dar cauce a la participación de la ciudadanía organizada en la gestión de los asuntos públicos– que, en palabras de Lostal, es "claramente insatisfactorio".

"El reglamento [de Participación Ciudadana de Madrid]–denunció la FRAVM en un informe que remitió el pasado mes de marzo al área de Gobierno– es interpretado sistemáticamente de manera restrictiva y burocrática", lo que en combinación "con la falta de competencias y recursos de las Juntas Municipales y de la voluntad política de quienes están al frente de las mismas"

han convertido a los Consejos Territoriales, "no en un espacio para la participación, la deliberación conjunta y la elaboración de propuestas", sino "en fuente de frustración y escenario de forcejeos en torno al procedimiento, a la interpretación de las escrituras".

Por todo ello, la federación vecinal promovió, de acuerdo a una de las medidas recogidas en su Plan Estratégico, un proceso de elaboración de presupuestos participativos desde abajo a fin de que las asociaciones vecinales, en colaboración con el tejido asociativo de los distritos y la participación de los vecinos y vecinas, elaboren una propuesta de presupuestos municipales que recoja las necesidades expresadas por la ciudadanía.

"Las cuentas del próximo año serán aún más restrictivas que las de este año –apunta Lostal–. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ya ha advertido que el ajuste previsto para 2011 será duro y a costa de lo que hoy consideramos intocable, un recorte al que acompañará el que lleve a

cabo el Gobierno autonómico y que, según ha anunciado la presidenta, rozará el 10%. En este contexto –concluye– es más necesario que nunca que las inversiones den respuesta a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, en especial de quienes sufren de forma más descarnada las consecuencias de la crisis y excluyan totalmente los gastos suntuosos".

El reto no es, ni mucho menos, sencillo. Por eso, la Federación vecinal organizó los pasados meses de febrero y abril dos talleres de formación. "Los plazos se nos han echado encima –advierte Lostal–, por lo que no podremos concluir el proceso en septiembre, como nos gustaría, para que nuestras propuestas puedan ser consideradas e incluidas en los presupuestos de 2011, pero estamos trabajando con el objetivo de trasladarlas a los candidatos a la alcaldía de Madrid que concurrirán en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2011. Todo ello –subraya– con una actitud responsable, un ánimo constructivo y con el convencimiento de que serán tenidas en cuenta".



Palacio de Cibeles, en cuya rehabilitación ha invertido el Ayuntamiento de la capital más de 100 millones de euros.

>> La Plataforma 10 Minutos **denunció en marzo la imposición del área sanitaria única y libre elección de médico**, toda vez que avanza en la desregulación total de la asistencia sanitaria a favor de las oportunidades de negocio. El decreto elimina el número máximo de pacientes por profesional y los tiempos mínimos de dedicación, induciendo así a la mala praxis.

>> La FRAVM solicitó el pasado mes de febrero la retirada de los **incentivos económicos** que el Gobierno regional paga, desde diciembre de 2009, a los médicos que reduzcan el número de bajas laborales firmadas, un mecanismo de dudosa ética y aprobado sin consenso que vulnera un derecho básico de los trabajadores. La prima puede alcanzar los 1.700 euros mensuales.

La sanidad pública madrileña pierde pulso

El deterioro de la asistencia sanitaria, los recortes en la construcción de más de la mitad de los centros de salud comprometidos para esta legislatura y la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios son sólo algunas consecuencias de la creciente transferencia de dinero público al sector privado que centra la gestión de la sanidad pública del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Las asociaciones vecinales dieron cauce al descontento de la ciudadanía y convocaron varias movilizaciones que ocuparon las calles de la capital los días 13 de mayo y 1 de junio.

Más de 1.700.000 madrileños están descontentos con la gestión de la sanidad pública realizada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, según el Barómetro Sanitario de 2009 publicado por el Ministerio de Sanidad. Para el 28% de las personas encuestadas, la atención es peor desde que se hiciera efectivo el traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, en el año 2001.

El diagnóstico coincide con el que vienen realizando el movimiento ciudadano, de acuerdo a la experiencia cotidiana de sus vecinas y vecinos y algunos sectores profesionales que colaboran en la comisión de Sanidad de la FRAVM.

Pepe Cabanillas, el responsable del área, señala la financiación como una de las causas de tal deterioro. "Madrid –apunta– es la segunda comunidad autónoma española que menos invierte en sanidad por habitante. El Gobierno de Esperanza Aguirre destina a este capítulo 1.108 euros per cápita, cuando la media estatal alcanza los 1.344 euros. A este dato, ya de por sí significativo –añade–, hay que sumar otro, igualmente esclarecedor: Madrid es la comunidad que menos dinero destina a la atención primaria. Sólo un 9,97% del presupuesto sanitario". La apuesta de Aguirre por la construcción de los nuevos hospitales de gestión privada, que cuestan al erario público el doble que los centros tradicionales, explica, en palabras de Cabanillas, "el abandono de la atención primaria que, aunque es el nivel asistencial más utilizado por la ciudadanía, sigue siendo el 'patito feo' para la administración".

Las crecientes partidas presupuestarias de las que son beneficiarias las



Foto: Olmo Calvo

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Móstoles, en la movilización.

empresas privadas que gestionan los servicios externalizados "restan recursos de donde verdaderamente hacen falta: de la atención primaria y de la contratación de personal sanitario", afirma contundente Cabanillas. La cuantía y el resultado de las inversiones, además, no parecen justificar el afán privatizador de la presidenta regional. Para muestra, dos ejemplos. El Ejecutivo regional ha abonado 26 millones de euros a la empresa privada adjudicataria del servicio de atención telefónica, una labor que hasta ahora realizaban los trabajadores públicos. Otros 6,3 millones de euros han ido a parar a la corporación tecnológica Stacks por diseñar y desarrollar la aplicación informática que permitirá a los médicos acceder a las historias clínicas desde cualquier punto, a los que ha tenido que sumar un recargo de 2,4 millones de euros, pagados a otra empresa (Everis), para acelerar la implantación –aún pendiente– del sistema, tras los múltiples colapsos que

ha sufrido. "‘Casualmente’ –apunta Cabanillas– poco después de que la empresa Stacks ganara el concurso para diseñar el sistema informático, fue adquirida por la multinacional francesa Cegedim, especializada en obtener y vender datos a la industria farmacéutica. La externalización de servicios –añade– abre la posibilidad a operaciones que, como en este caso, evidencian el goloso pastel que los usuarios de la sanidad representamos para las empresas privadas sin escrúpulos".

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, comparte esta inquietud ante la creciente externalización de los servicios sanitarios promovida por el Ejecutivo madrileño, tal como puso de manifiesto en su informe de 2008, toda vez que su progresión "podría llegar a vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad".

>> La Consejería de Sanidad no aplicará los aspectos más restrictivos de la orden reguladora de la **tarjeta sanitaria**. Es el compromiso adquirido con la FRAVM después de que ésta denunciara la vulneración de derechos constitucionales en el acceso a la sanidad aplicado a colectivos vulnerables, como las personas migrantes sin permiso de residencia o trabajadores en situación de desempleo.

>> La Coordinadora de Colectivos Afectados por el Plan Integral de Mejora de las Instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (**CIEMAT**), de la que forma parte la FRAVM, presentará una querrela criminal contra los responsables del centro por no garantizar las mínimas garantías de control y seguridad en el desarrollo de su actividad.



FOTO: OSCAR CHAVES

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Móstoles, en la movilización.

La transferencia de dinero público al sector privado es, en palabras de Cabanillas, "directamente proporcional a la descapitalización del sistema sanitario público madrileño, al deterioro de la asistencia sanitaria y a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales".

De hecho, a un año del final de la legislatura, de los 55 centros de salud comprometidos por Aguirre durante su campaña electoral, sigue en el aire la construcción de al menos 28 de ellos. Entre otros, el de Las Tablas, Boadilla, Montecarmelo, Navalcarnero, Las Margaritas (Getafe), Rivas-Vaciamadrid, Leganés (Arroyo Culebro), San Fernando de Henares, Comillas, Abrantes y Paseo 15 de Mayo (Carabanchel), Simancas (San Blas) y Adelfas (Retiro), algunos de los cuales tienen redactados los proyectos y cuentan con suelo, cedidos por los respectivos ayuntamientos a tal efecto.

Al abandono de las infraestructuras, hay que sumar la congelación de la contratación del personal sanitario. Desde hace tres años, denuncia la Plataforma de Eventuales de Atención Primaria en Madrid, la Consejería de Sanidad oferta sólo contratos eventuales para cubrir puestos estructurales. Desde principios de 2010, éstos se renuevan cada tres meses, "incumpliendo –subraya la Plataforma– su propia normativa, recogida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud".

"La congelación laboral –añade Cabanillas– se traduce, en la práctica, en una disminución del personal disponible, ya que no se cubren las bajas ni las jubilaciones. Esta práctica ha incrementado las listas de espera, que en algunos centros de salud, como el de Orcasitas o Las Rejas, en San Blas, afecta ya a los médicos de cabecera, algo nunca visto en nuestra comunidad", remacha.

Movilización ciudadana

Las consideraciones referidas fueron sólo algunas de las que expusieron las asociaciones vecinales en la asamblea sectorial convocada por la FRAVM el pasado mes de marzo. Los asistentes aprobaron un plan de trabajo para la comisión de Sanidad y acordaron convocar dos jornadas de movilizaciones para denunciar el deterioro de la sanidad pública provocado por la política privatizadora de Aguirre. La primera tuvo lugar el 13 de mayo. Decenas de asociaciones vecinales de los distritos de Carabanchel, San Blas, Moncloa, Retiro, Fuencarral, Vicálvaro, Hortaleza, San Blas, Usera, Puente de Vallecas y Chamartín convocaron manifestaciones, concentraciones y actos informativos para hacer públicas las reivindicaciones propias de sus barrios y anunciar la inminente celebración de una manifestación central convocada por la FRAVM.

La movilización, apoyada por la Coordinadora de Equipos de Atención Primaria, la Plataforma 10 Minutos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, el Sindicato de Sanidad-CGT, las plataformas en defensa de la sanidad pública del Henares, de Rivas, de Leganés, la Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid (APISCAM), la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), PSM-PSOE e IU logró reunir más de dos millares de personas. Todas ellas recorrieron las calles del centro de la capital desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Allí, tras guardar un minuto de silencio por los activistas de la llamada Flotilla de la Libertad asesinados por el ejército israelí dos días antes en su camino hacia Gaza, el presidente de Federación vecinal, Nacho Murgui, leyó un comunicado: "Exigimos –subrayó– al Gobierno regional que retire el decreto [de área única y libre elección de médico] y rediseñe el mapa sanitario de manera consensuada con los agentes sociales, profesionales y usuarios y usuarias". La FRAVM reclamó, asimismo, el desarrollo de un Plan Integral de Salud "que contenga medidas urgentes dirigidas, entre otras, a la reducción real de las listas de espera" y la derogación de la Ley estatal 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, ya que "es el suelo abonado para la transformación del sector público sanitario en una nueva y apetitosa cantera de negocios" y la reforma de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid dirigida a garantizar una atención sanitaria de calidad y el carácter público de la sanidad madrileña. Sin olvidar, por supuesto la construcción pendiente de 28 centros de salud de los 55 comprometidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre y la contratación del personal médico necesario para atender las necesidades de la población.

El comunicado no olvidó una de las cuestiones más candentes del debate público sobre la gestión de la sanidad: el copago. "No vamos a aceptar –concluyó– que nos hagan pagar o co-pagar por un derecho que hemos conquistado y que nos pertenece. Las administraciones deben tomar ya las medidas oportunas para garantizar su carácter público, universal, gratuito y de calidad".

>> Las asambleas informativas de las **áreas de rehabilitación de Manoterás, colonia Urpisa y Ciudad Pegaso** cosecharon, como de costumbre, un notable éxito de asistencia. Si Manoterás contó con el apoyo de representantes de las administraciones estatal, regional y local, la colonia Urpisa tuvo el apoyo de la junta de distrito y de la ORE 06, cuyo director, con la responsable de la oficina de la EMVS, también estuvo presente en Ciudad Pegaso.

>> La constitución de la **Mesa de Rehabilitación de Alcorcón**, con la presencia de seis asociaciones vecinales más la FRAVM y de representantes de las tres administraciones públicas es una iniciativa del asociacionismo vecinal, secundada por la concejala de Urbanismo, aprobada unánimemente en Pleno y presidida por el alcalde. Las seis asociaciones forman parte hoy de la federación.

“Queremos rehabilitar pero queremos cobrar”

Bajo este lema, dos centenares de vecinos y vecinas de tres zonas de rehabilitación integral se concentraban en marzo ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y en mayo ante la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para denunciar que el actual Gobierno regional no afronta como debiera los compromisos adquiridos ni sus obligaciones en materia de rehabilitación urbana.

Los convocantes de ambas concentraciones (las asociaciones vecinales Los Pinos de San Agustín, San Ignacio de Loyola y Casa de Campo-Batán) denunciaban tanto el impago y el permanente retraso en la percepción de las ayudas a obras de rehabilitación ya realizadas, como las cortapisas para obtener las calificaciones provisionales —sin las cuales no se pueden comenzar obras proyectadas, presupuestadas y contratadas—, primero, y las calificaciones definitivas al final; calificaciones que habilitan, respectivamente, el cobro del primer y segundo 50% de la subvención.

Las tres asociaciones vecinales citadas, con la federación regional, actuaban de portavoces y ponían de manifiesto el creciente malestar del asociacionismo vecinal madrileño con la política aplicada por la actual dirección general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid.

En octubre de 2009, con diez meses de retraso, se publicó el Plan de Rehabilitación regional 2009-2012 que, 19 meses más tarde, no cuenta con las preceptivas bases reguladoras que permitan gestionarlo. En febrero de 2010 suscribió la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Vivienda el primero de los programas de rehabilitación adscrito a los planes de vivienda estatal y regional 2009-2012, dejando fuera cinco áreas de rehabilitación integral (ARI) en la ciudad de Madrid pactadas en la anterior legislación con la FRAVM y el Ayuntamiento, y vetando simultáneamente la participación del Ayuntamiento de Madrid en la gestión y financiación de las ARI de

Manoterás y colonia Urpisa, impulsadas por las asociaciones vecinales del ámbito y la FRAVM. Desde diciembre de 2009 no nos consta que haya firmado el director general calificaciones, subvenciones... ni a obras de rehabilitación ni a instalación de ascensores, ni siquiera en los casos en los que la gestión y los fondos son municipales y no supondría desembolso para la Comunidad de Madrid. Por si no bastara, el Plan de Rehabilitación regional 2009-2012, que “se carga” la rehabilitación integral por áreas o zonas y subvenciona —cuando lo haga— las obras “a la carta” (puedes reparar la fachada, y cuando quieras la cubierta y cuando estimes conveniente actúas en la escalera y pones el ascensor...), introduce el silencio administrativo negativo: en tres meses, de no haber respuesta, quedarían denegadas las ayudas a la rehabilitación, y ello cuando se tarda seis meses, como mínimo, en tramitar un expediente sin mayores problemas y sin requerimientos.

El Plan de Rehabilitación regional 2009-2012 “se carga” la rehabilitación integral por áreas o zonas, dejando en el aire 7.000 actuaciones en 16 áreas.

Esta es, en síntesis, la situación a la que se enfrentan hoy 46 asociaciones vecinales de la ciudad de Madrid y de municipios de la región implicadas en programas de rehabilitación inte-



Familias afectadas por el impago de las ayudas a la rehabilitación se concentraron ante la Consejería de Vivienda el pasado 18 de mayo.

Foto: Delia Medina

gral de sus barrios, a los que corresponden 80.000 actuaciones en 50 áreas o zonas de rehabilitación integral (cinco de ellas aún sin declarar), y 63 las asociaciones de 18 distritos de la ciudad de Madrid y de 10 municipios que se interesan, igualmente, por la rehabilitación de edificios, la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras (instalación de ascensores) y por los programas públicos de ayudas a la rehabilitación o renovación urbanas.

Pese a que la rehabilitación urbana parece estar en boga y a que, de atender a los enunciados de la Administración regional —competente en materia de vivienda—, hasta podría parecer que la política de vivienda ha cambiado de signo y que el Gobierno regional apuesta por la rehabilitación y regeneración de los barrios existentes frente a los nuevos y desmedidos desarrollos, los hechos, como vemos, son tozudos. Una organización como la FRAVM, interlocutora preferente en materia de rehabilitación urbana con el Ayuntamiento de Madrid, con el de Alcorcón, con las oficinas de rehabilitación regionales (ORE) y las oficinas municipales, con el Ministerio de Vivienda, con los grupos políticos y, sobremanera, con los vecinos y vecinas tiene hoy —como los alcaldes, los concejales y los cargos públicos— vetado su acceso al actual director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Visto desde nuestra dilatada experiencia de anteriores periodos “negros”, sólo cabe concluir con que las asociaciones vecinales y la rehabilitación urbana permanecen mientras los directores generales pasan.

>> La FRAVM mantiene el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la ordenanza de la **tasa de la basura** del Ayuntamiento de la capital por no haber presentado un informe técnico-económico que justifique el coste real del servicio y por el desigual cobro de la tasa en función de circunstancias ajenas su uso, entre otros motivos.

>> La FRAVM solicitó, el pasado mes de mayo, la retirada de la Ordenanza Ordenanza para el Desarrollo de la Información de Madrid ya que no regula las necesarias medidas de protección de la salud de la población, ignorando así las últimas resoluciones del Parlamento Europeo. Tampoco considera las recomendaciones que instan a alejar las antenas de telefonía móvil de escuelas o centros de salud.

Cerco a la contaminación electromagnética

Más de 350 ordenanzas municipales reguladoras de la emisión de radiaciones electromagnéticas, entre ellas la de Leganés, así como la legislación de Castilla La Mancha, Cataluña, Navarra y el País Vasco son considerablemente más garantistas que la legislación estatal en su protección de la salud de las personas. La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, de la que forma parte la FRAVM, ha abierto una vía de diálogo con el ministerio de Sanidad para promover una modificación legislativa que garantice la salud de la ciudadanía de acuerdo a las recomendaciones del Parlamento Europeo.

Diecinueve organizaciones radicadas en varias comunidades autónomas constituyeron, el 7 de marzo de 2009, la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCE). Poco más de un año después, suman más de medio centenar. Este incremento da cuenta, en palabras de Francisco Caño, responsable de Medio Ambiente de la FRAVM, "de la creciente preocupación de la ciudadanía ante la desordenada proliferación de antenas de telefonía móvil e instalaciones emisoras de radiaciones electromagnéticas. Una preocupación –añade– a la que está haciendo caso omiso el Ejecutivo central, que hasta ahora ha preferido alinearse con los intereses de la industria de telecomunicaciones que defender la salud y la seguridad de la ciudadanía. Una irresponsabilidad –califica– teniendo en cuenta que el 80% de las cerca de 25.000 investigaciones realizadas desde 1999 para determinar las consecuencias de las radiaciones electromagnéticas han detectado efectos negativos sobre la salud y que existen recomendaciones europeas que instan a los estados a que rebajen los límites de exposición a los campos electromagnéticos".

Desde su constitución, la Plataforma ha solicitado en diferentes ocasiones al Ejecutivo central que modifique el RD 1066/2001, que establece las medidas de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas por cuanto establece unos límites máximos que están 4.500 veces por encima de lo recomendado por el Parlamento Europeo en su resolución del 2 de abril de 2009.

"Nos ha costado, pero vamos consiguiendo que, al menos, presten oídos a nuestras reivindicaciones". Así resume Caño el fruto de la reunión mantenida con res-

ponsables del ministerio de Sanidad el pasado mes de mayo, en la que "nos aseguraron que propondrán la creación de un observatorio interministerial integrado por Sanidad, Industria y Medio Ambiente que cuente, asimismo, con participación de expertos y representantes de movimientos sociales para estudiar la modificación del RD 1066/2001 y que estudiarán la posibilidad de considerar la electrosensibilidad como enfermedad, siguiendo el ejemplo de Suecia. Además –añade– nos dijeron que están trabajando en la elaboración de un protocolo de actuación que harán llegar a los profesionales de la red sanitaria pública para que sepan cómo actuar ante afecciones derivadas de la exposición a la contaminación electromagnética".

Leganés, un municipio pionero

Pero, sin duda, uno de los frutos más visibles de la labor del movimiento ciudadano en defensa de la aplicación del principio de precaución ante la caótica proliferación de infraestructuras de telecomunicaciones se materializó el 18 de diciembre de 2009, fecha en la que el pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés aprobó la Ordenanza Municipal reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso de servicios de telecomunicaciones. La normativa, consensuada por el equipo de Gobierno con la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés y con la FRAVM, es pionera en España ya que establece un límite máximo de emisiones electromagnéticas de 0,1 microvatios por centímetro cuadrado en todo el término municipal, un valor 4.500 veces por debajo de lo que contempla la legislación española. El incumplimiento del valor referido será castigado con sanciones económicas y la retirada de las instalaciones de las



FOTO: RAFAEL GÓMEZ

La asamblea informativa sobre la ordenanza de emplazamiento de antenas de telefonía móvil logró reunir a más de 150 personas.

compañías infractoras. La normativa contempla, además, la puesta en marcha de una red de medidores de las radiaciones electromagnéticas cuya información será de dominio público y la creación de

El Tribunal Supremo ratificó en marzo la ordenanza de Alcoy que impide colocar antenas a menos de 100 metros de colegios y centros sanitarios.

una comisión de seguimiento del cumplimiento de la ordenanza integrada por técnicos municipales, expertos, representantes de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos y representantes de las empresas de telecomunicaciones. El objetivo de la ordenanza, resume el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Raúl Calle, es "dar un servicio de calidad, pero con pocas emisiones", una filosofía que quieren seguir los "cerca de 300 municipios que –asegura– están estudiando cómo implantarla".

>> El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso esencial para la consecución de una vieja reclamación del vecindario de **Orca-sitas** (Usera): la rehabilitación y su conversión en equipamiento público de la iglesia Maris Stella, en el parque de Prado-longo. El Consistorio modificó en abril el PGOU para dotar al templo, que fue levantado entre 1920 y 1930, de una protección de nivel 2, lo que permite una rehabilitación del edificio para uso dotacional.

>> La Asociación de Vecinos Independiente de **Butarque** (AVIB), junto a las AMPA de este barrio de Villaverde, consiguió reunir el 13 de junio a cientos de ciudadanos en una manifestación para exigir al Gobierno regional que construya "¡ya!" un prometido instituto público e instalaciones para el colegio Ausías March, que aunque tiene personalidad jurídica propia, actualmente "okupa" parte del CEIP El Greco al carecer de inmueble. La negativa de la consejera de Educación a reunirse con AVIB asegura nuevas movilizaciones en el inicio del curso 2010-2011.

Aravaca, en lucha por su independencia

Hartos de ser tratados como ciudadanos de segunda, los vecinos y vecinas de Aravaca han comenzado a movilizarse para conseguir que el barrio, que actualmente pertenece a Moncloa, sea declarado distrito independiente. Para la asociación vecinal Osa Mayor, disponer de una administración más cercana es la única manera de acabar con los numerosos déficit que padece el barrio.

"A pesar de las enormes plusvalías que ha generado y genera la venta de suelo tras sucesivas recalificaciones, los vecinos de Aravaca no vemos nada de ese dinero, por eso reclamamos ser distrito independiente", sostiene Amelia Romero, portavoz de la asociación vecinal Osa Mayor, que recuerda con nostalgia los tiempos en los que el barrio estaba repleto de zonas verdes. "Ahora, para ir a una biblioteca, a las urgencias médicas o incluso para disfrutar de jardines tenemos que acudir a la localidad vecina de Pozuelo", resume la representante ciudadana, antes de añadir: "Es una vergüenza que mientras las grúas llenan la zona de El Barrial, construyendo pisos y más pisos, aquí tengamos tantas carencias". Por este motivo, la entidad vecinal, junto a la asociación cultural ACROLA y el Colectivo 1984 organizó el pasado 28 de mayo una concentración en la plaza María Reina, frente a la parcela en la que la Administración ha prometido construir una biblioteca que los vecinos reclaman desde hace tres décadas. Unas 200 personas protestaron contra lo que consideran un "agravio comparativo entre los servicios ofrecidos en Aravaca y en el resto de Madrid". Gritos como "Si vota la gente, distrito independiente" o "Hace falta ya un instituto en Aravaca. Hace falta ya

Los 26.000 habitantes de Aravaca (el 7% de la población del distrito de Moncloa-Aravaca) necesitan "urgentemente", además de una biblioteca y un instituto público, una escuela infantil municipal y un centro de día para mayores.

biblioteca y hospital" que se profirieron en el acto, resumen a la perfección el sentir de los ciudadanos de esta zona que hasta 1951 era un pueblo separado de Madrid.

Según la asociación de vecinos, la concentración abre un periodo de protestas que continuará en septiembre con un acto ante el centro de salud del barrio con objeto de exigir la apertura de un servicio de urgencias de 24 horas. "Nuestra idea es manifestarnos en todos los puntos de reivindicación. Tras la manifestación en el centro de salud, nos concentraremos bajo las torres de alta tensión de la calle Almanzora, que aunque no tienen electricidad desde hace un año, aún no se han desmontado y suponen un peligro para los vecinos", asegura Romero. Tras una lucha ciudadana que ha durado dos décadas, en mayo de 2009 Red Eléctrica Española cortó definitivamente el suministro del cableado de alta tensión que sobrevolaba las viviendas del barrio, después de poner en marcha un sistema eléctrico soterrado, pero todavía no ha retirado las antiguas y molestas instalaciones.

Las tres entidades promotoras de la campaña ciudadana, que ya han recogido más de 2.000 firmas para reclamar que Aravaca sea declarada el distrito número 22 de la capital, insisten en que sus casi 26.000 habitantes (el 7% de la población del distrito de Moncloa-Aravaca) necesitan "urgentemente", además de una biblioteca y un instituto público, una escuela infantil municipal y un centro de día para mayores. En materia de movilidad, demandan un autobús directo al hospital Puerta de Hierro y la inclusión de todo el barrio en la "zona A" del abono transporte de la Comunidad de Madrid, como disfruta la inmensa mayoría de los usuarios del área metropolitana. Por otro lado, en Aravaca "los servicios que vienen prestando las distintas administraciones públicas son bas-

tante deficientes", como muestra el estado actual de sus calles y plazas ("mal atendidas, sucias, con baches, mal señalizadas, con pintadas") o el escaso mantenimiento de sus zonas verdes. "Siendo un distrito independiente, entre todos podremos decidir y elegir las prioridades de los servicios que queremos tener con los impuestos y tasas que pagamos", asegura Osa Mayor en un escrito en el que también pide una reducción de "las altísimas tasas municipales que venimos soportando". Además, como distrito autónomo "podremos conseguir que la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil se destine a actividades socio-culturales en beneficio de los vecinos y que se promuevan ofertas de viviendas de protección oficial o similares, tanto en régimen de compra como de alquiler", concluye la entidad ciudadana, que se muestra convencida de que la mayoría del vecindario apoya su demanda independentista.



Unas 200 personas se concentraron el 28 de mayo para reclamar que Aravaca sea declarada el distrito número 22 de la capital.

>> Otra Gran Vía, la de los problemas de movilidad, la contaminación acústica y atmosférica, el tráfico de drogas, las personas sin techo y el cierre de los cines históricos se esconde tras las luces de neón y los grandes fastos de su centenario. Así lo ha denunciado en estos meses la **Asamblea Universitaria del Barrio de Universidad**, asociación vecinal que ha sido excluida de los actos de celebración de los cien años de la calle más emblemática de la ciudad.

>> Insuficiente. Así califica la **Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel** el anuncio hecho el 30 de junio por la ministra Carme Chacón, que aseguró que el hospital militar Gómez Ulla se convertirá en centro de referencia de 110.000 madrileños de Carabanchel a partir del próximo mes de octubre. Las AAVV, que se han llevado su reclamación a la calle en varias ocasiones en los últimos meses, recuerdan que el centro tiene suficientes recursos para atender a los 250.000 vecinos del distrito.

San Cristóbal de los Ángeles: una rehabilitación ejemplar

El pasado 31 de mayo, unas jornadas inauguradas por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, servían para celebrar el décimo aniversario de una rehabilitación urbanística que aparece como un modelo no sólo en el territorio español sino en el espacio europeo. En este tiempo, gracias a la participación del vecindario y a la acción coordinada de las tres administraciones, se han rehabilitado más de 1.500 viviendas e instalado 75 ascensores en las fachadas de este popular barrio de Villaverde.

"Más allá de lo que ha supuesto en términos de participación vecinal, hay que destacar los resultados cuantitativos: de las 5.800 viviendas de San Cristóbal, a día de hoy se han rehabilitado 1.507 y a finales de 2011 habrán sido más de 2.000, y todo con dinero público", indicó Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, al término del encuentro que, organizado en la sede del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid sirvió para celebrar, por todo lo alto, los diez años del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de este barrio de Villaverde. De la importancia del acontecimiento da muestra la presencia de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de la delegada de Urbanismo y Vivienda del consistorio, Pilar Martínez, del viceconsejero de Vivienda y Suelo de la Comunidad de Madrid, Juan Blasco, así como del director general de Gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Pablo Olangua. Junto a ellos, la histórica dirigente de la asociación vecinal La Unidad de San Cristóbal, María del Prado de la Mata, puso en valor la acción ciudadana, auténtica protagonista de un proceso que ha transformado, para mejorarla, una de las zonas más castigadas de la capital.

Tras numerosas movilizaciones en la calle y negociaciones con los responsables políticos, el movimiento vecinal de Villaverde consiguió que el antiguo Poblado Dirigido de San Cristóbal, un barrio de vivienda protegida que nace en los sesenta, fuera declarado ARI en 1999. Los edificios, construidos con materiales baratos y evidentes deficiencias técnicas y estructurales, "se caían de viejos". A este hecho se sumaba la ausencia de ascensores en los inmuebles de bloque abierto, una dificultad añadida en un barrio que padece un progresivo envejecimiento demográfico y cuenta con una de las rentas per cápita más bajas de la capital. "Los comienzos fueron difíciles, pero el proceso ha sido muy interesante: poco a poco ves cómo se va construyendo un barrio nuevo, a pesar de la dificultad para las familias, que han tenido que adelantar dinero para la rehabilitación", sostiene Prado de la Mata, antes de subrayar la importancia de la participación del vecindario. "Las ARI no pueden reducirse al ladrillo. Más importante si cabe es el trabajo con los vecinos y vecinas, que tiene que hacerse de manera pareja, porque detrás de los ladrillos viven personas", asegura.

En San Cristóbal, las asociaciones vecinales participan en el desarrollo de la iniciativa a través de la llamada Mesa de Rehabilitación. Para ellas, otro de los aspectos esenciales de este



De izda. a dcha.: Pablo Olangua, director general de Gestión de la EMVS; Pilar Martínez, delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid; Beatriz Corredor, ministra de Vivienda; Juan Blasco, viceconsejero de Vivienda y Suelo de la Comunidad; y Prado de la Mata, presidenta de la AV San Cristóbal.

tipo de rehabilitación urbanística es la intervención coordinada de las administraciones implicadas. "El ARI nos ha enseñado que este tipo de procesos tienen que ir acompañados de la acción de las tres administraciones, la municipal, la regional y la estatal. Este hecho, y la participación vecinal nos ha convertido en un modelo no sólo para España sino para Europa, tal y como se vio en las jornadas". En ellas, además de otros expertos en urbanismo, participaron dirigentes de otras asociaciones vecinales del distrito y de Madrid y profesionales de la FRAVM que han estado muy implicadas en el proceso, como María Rocas, responsable de la Comisión de Urbanismo y Rehabilitación de la federación.

"Las ARI no pueden reducirse al ladrillo. Más importante si cabe es el trabajo con los vecinos y vecinas, que tiene que hacerse de manera pareja, porque detrás de los ladrillos viven personas", asegura Prado de la Mata.

Como resultado de estos diez años de trabajos, ya han sido arregladas el 32% de las viviendas del barrio y 400 familias se hallan en estos momentos en trámite de obtener nuevas ayudas para rehabilitar sus hogares. Además, se han instalado 75 ascensores en fachadas, se han reformado 52 locales y se han renovado 300.000 metros cuadrados de viales y zonas verdes. En total, se han invertido casi 43 millones de euros, de los cuales 22,4 millones corresponden al Ayuntamiento de Madrid, 11,8 millones al Ministerio de Vivienda y 8,3 millones a la Comunidad de Madrid. De esta cantidad, 18,6 millones han servido para mejorar 90.000 metros cuadrados de calzadas y 177.000 de aceras y para ajardinar 29.000 metros cuadrados de espacios públicos. En concreto, se han plantado 513 árboles y 189.000 arbustos.

Tras el éxito rotundo de este plan de rehabilitación participada, "ahora negociamos para que el proceso se amplíe a más familias del barrio en una nueva fase", concluye Vicente Pérez Quintana.

>> La **AV de San Sebastián de los Reyes**, junto al resto de colectivos vecinales y ecologistas que componen la Plataforma M-50 No, llevó su protesta contra el anteproyecto de cierre norte de esta autovía a la tradicional Fiesta de la Caldereta de esta localidad el pasado 2 de mayo. El acto se inscribe en el marco de un proceso de movilización que, de continuar adelante los planes de la Comunidad de Madrid y del consistorio, continuará tras el verano.

>> La Ordenanza General Reguladora de la Convivencia Ciudadana aprobada en fase inicial por el Ayuntamiento de Getafe el 5 de mayo no es, ni mucho menos, del gusto de las asociaciones vecinales del municipio. Dos de ellas, **Vientos del Pueblo y Aires Nuevos**, piden su retirada ya que favorece la patrimonialización o privatización del espacio público y criminaliza algunas actividades propias del ejercicio de la democracia participativa.

Huertos urbanos: agricultura comunitaria a pie de asfalto

Al auge de los grupos de consumo de productos ecológicos en los últimos años se ha añadido un nuevo fenómeno en Madrid: la creación de huertos urbanos comunitarios. Consciente de su enorme potencial, la FRAVM ha respondido a esta realidad con la puesta en marcha de una comisión de trabajo específica en la que participan proyectos consolidados como el huerto de la plaza de Corcubión (Barrio del Pilar) junto a otros de reciente creación como la huerta de Adelfas (Retiro Sur).

Aunque Madrid aparezca hoy en día como una de las pocas urbes europeas sin zonas destinadas a producción agrícola ecológica, esto no siempre fue así. Tal y como han documentado historiadores y cronistas, la "tradición hortícola" de la villa se mantuvo hasta mediados del siglo XX, un periodo en el que el "urbanismo salvaje y la tecnocracia de los años sesenta y setenta", en palabras de Luciano Labajos, de Ecologistas en Acción, transformaron los entornos hortelanos hasta hacerlos desaparecer. Sin necesidad de remontarnos a la época medieval, en la que "las huertas se extendían alrededor de la ciudad de Madrid, sobretudo en la vega del río Manzanares", continúa Labajos, a mediados del siglo XIX, "fuera de la cerca de la ciudad" existían 325 hectáreas de huertas. Este rasgo de la urbe, que resiste hasta la posguerra, llevará al geógrafo Manuel de Terán a describirla de la siguiente manera: "un mundo de formas orgánicas y orgánicamente trabado con el paisaje natural viene a batir a las puertas de las murallas y penetra en su interior en forma de huertas y jardines".

En los ochenta, con la metrópoli convertida ya en un océano de asfalto y hormigón, tuvieron lugar modestas aunque interesantes iniciativas de recuperación de huertos urbanos y enseñanzas agrícolas. Desde una óptica de educación ambiental, se pusieron en marcha proyectos como los talleres-escuela de la Quinta de los Molinos (Ciudad Lineal) y del parque de El Capricho (Barajas), las

huertas urbanas de la avenida Miguel Hernández (Puente de Vallecas) o los huertos de ocio de San Fermín (Usera), que fueron impulsados y mantenidos por la asociación vecinal del entorno hasta la creación del Parque Lineal del Manzanares.

Tras estas experiencias y unos años de sequía, de forma paralela a la extensión de proyectos de agricultura ecológica

ca en los entornos rural y periurbano de la región madrileña, en los noventa los grupos de consumo de productos biológicos se multiplican. En muchas ocasiones, usan las infraestructuras de las asociaciones vecinales o surgen directamente de sus integrantes, que los impulsan llevados por el deseo de consumir alimentos sanos y, sobretudo, por una crítica al modelo agroalimentario industrial. Frente a la agricultura convencional,



FOTO: AV VENTILLA-ALMENARA

Huerto urbano promovido por la asociación vecinal Ventilla-Almenara en Tetuán.

>> Tal como denuncia la **AV La Merced de Quintana**, a pesar de que el Ayuntamiento se comprometió hace dos años a finalizar antes de 2010 los trabajos de reforma de la piscina al aire libre de La Concepción, ésta permanece cerrada por tercer verano consecutivo y sin visos de una pronta apertura. A esto se une la clausura, también por obras y desde hace un año, de la piscina climatizada del mismo complejo deportivo y el reciente cierre de las tres piscinas al aire libre de La Elipa, unas instalaciones muy usadas por el vecindario de Ciudad Lineal.

>> La **Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés** ha invitado al Ayuntamiento de la localidad a abrir un proceso de diálogo para consensuar el futuro de la plaza de toros de La Cubierta, un espacio infrautilizado y foco tradicional de problemas. Las AAVV ya propusieron en septiembre de 2008 al Consistorio que estudie, con las entidades culturales, sindicales, sociales y deportivas la reconversión y usos de estos espacios descartando la opción del rescate con fondos públicos.

que fomenta una producción intensiva, emplea productos químicos y organismos modificados genéticamente, utiliza canales de distribución absolutamente ajenos al campesino y el consumidor carece de control alguno sobre lo que consume, los grupos de autoconsumo promueven un modelo "de ciclos cortos". En éste, la figura del distribuidor es sustituida por una relación directa entre consumidor y productor, que además cultiva alimentos de temporada, sin usar pesticidas ni otros químicos, y trata de recuperar variedades autóctonas y sostenibles. En 1997, la expansión de estos colectivos genera la primera experiencia de coordinación en Madrid: la Red Autogestionada de Consumo, que no sólo canaliza productos agrícolas sino también ganaderos e incluso productos de limpieza e higiene personal. En unos años, barrios de los cuatro puntos cardinales de la capital y algunos municipios como Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz verán nacer grupos autogestionados de consumo y, junto a ellos, en algu-

na zona y como hecho aún aislado, huertos comunitarios. Es el caso del Barrio del Pilar (Fuencarral), donde un grupo de vecinos ligados a la asociación La Flor ocupó en el verano de 2006, para acondicionarla, una parcela abandonada en la plaza de Corcubión. Apenas cuatro años después, el solar se ha transformado en un "huerto comunitario" en el que, gracias a la labor desinteresada de jóvenes y mayores, crecen tomates, calabacines y plantas aromáticas.

Siguiendo la estela de esta exitosa experiencia, asociaciones vecinales de otros barrios de la capital han elaborado proyectos hortícolas que en algunos casos han tomado forma en solares en desuso. Así, el pasado 10 de mayo la asociación vecinal Los Pinos de Retiro Sur inauguró su particular huerto comunitario en un terreno ganado al asfalto en el barrio de Adelfas. Decenas de personas de todas las edades lo mantienen desde entonces. En la otra punta de la ciudad, en Tetuán, las asociaciones

Ventilla-Almenara y Radio Almenara están detrás de una iniciativa similar. En ambos casos las entidades ciudadanas se han instalado en espacios públicos que se hallaban en estado de abandono.

Fruto de esta nueva inquietud que recorre los barrios y pueblos de la región, la FRAVM constituyó el pasado 18 de febrero la Comisión de Consumo Sostenible con objeto de promover, a través de iniciativas como los huertos comunitarios o los grupos de autoconsumo, un modelo de producción, distribución y consumo respetuoso con el medio ambiente y los trabajadores. Abierto a la participación de todas las asociaciones, el nuevo grupo de trabajo, que se reúne el tercer lunes de cada mes en la sede de la federación, está compuesto por colectivos vecinales de Retiro, Usera, Latina, Vallecas, Tetuán, Ciudad Lineal, Moratalaz, así como por grupos de la Red Autogestionada de Consumo y Ecologistas en Acción.



Foto: AV Los Pinos de Retiro Sur

>> La **AV San Cristóbal**, después de manifestarse con las familias afectadas y entablar una negociación con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha conseguido que ésta rectifique su decisión de suprimir, para el curso 2010-2011, la ruta escolar que trasladaba a los colegios de su barrio a niños y niñas de 50 hogares de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) que se encuentran realojados temporalmente en el vecino barrio de San Fermín (Usera).

>> **Las AAVV General Ricardos y Pradera Tercio Terol**, al igual que el conjunto de entidades ciudadanas de Carabanchel, se oponen rotundamente a la instalación de parquímetros en la avenida General Ricardos, una posibilidad a la que hizo mención el 5 de mayo Gallardón durante una visita que realizó para conocer el resultado de las obras de recuperación de la vía. Las asociaciones critican la "ocurrencia" y exigen un Plan Integral de Movilidad para el conjunto del distrito.

El fantasma del campo de golf regresa a Tres Cantos

En 2005, después de cuatro años de batalla, el vecindario de Tres Cantos logró paralizar un proyecto de campo de golf que el Ayuntamiento tenía previsto desarrollar en el llamado Parque del Este. Pero el Consistorio, gobernado por el PP, con el refrendo del Ejecutivo regional, no cesa en su empeño de convertir al municipio en capital de este deporte de elite y ahora aspira a ser sede del torneo más importante del mundo, la Ryder Cup.

Si hace un lustro el reto para la asociación vecinal del municipio era difícil, ahora lo es doble. La construcción de un campo de golf en una finca pública de Tres Cantos para celebrar el campeonato de la Ryder Cup en 2018 se ha convertido en todo un asunto de estado, como quedó reflejado el pasado 14 de mayo. Ese día, una delegación encabezada por Felipe de Borbón y Esperanza Aguirre recibió a la Comisión Evaluadora de este torneo en el Palacio de la Zarzuela, mostrando su apoyo cerrado a un proyecto que fue aprobado por el Ayuntamiento de la localidad el 24 de febrero. A pesar de estos hechos, la entidad ciudadana, con las organizaciones sociales que conforman la Plataforma en Defensa de las Zonas Verdes de Tres Cantos, ha prometido presentar batalla para echar abajo el proyecto, recogiendo el parecer de buena parte de los ciudadanos de la localidad. Para ello, ya ha organizado asambleas ciudadanas, iniciado una recogida de firmas y prepara manifestaciones y otras acciones de protesta. "No tenemos nada contra el golf, pero

estamos seguros de que la Finca Valdelosielos, cuya superficie supera los 2,28 millones de metros cuadrados, lindante con el Monte del Pardo y calificada en el Plan General de Tres Cantos como de calidad ambiental máxima, no es el emplazamiento idóneo", sostiene Pedro Ayala, presidente de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos. Junto a la parcela elegida, "una inmensa zona pública que pasará a manos privadas", se halla otra, de 180 hectáreas, propiedad de la empresa Colonial, hoy sin uso. Este hecho hace sospechar a los tricantinos que detrás del proyecto "se esconde la posibilidad de un pelotazo urbanístico de enormes dimensiones", según Ayala. Máxime, cuando las posibilidades de que este municipio consiga ser sede en 2018 del torneo de golf más prestigioso del mundo son prácticamente nulas. La Ryder Cup es un campeonato que enfrenta cada dos años a un equipo de golfistas de EEUU contra otro europeo. Sólo una vez, en 1997, se celebró fuera de Gran Bretaña, y lo hizo en el campo gaditano de Valderrama, por lo

Detrás del proyecto "se esconde la posibilidad de un pelotazo urbanístico de enormes dimensiones", según la Asociación Vecinal de Tres Cantos.

que las probabilidades de que España vuelva a obtener la sede del torneo son muy reducidas. Francia, Alemania, Holanda, Portugal y Suecia compiten también en un proceso que se resolverá en abril de 2011. "La presentación de la Candidatura a la Ryder Cup es solo una excusa sin fundamento para construir un campo de golf de enormes dimensiones en un enclave protegido", insiste Ayala, que cuenta con el apoyo de la FRAVM y de organizaciones ambientalistas como ARBA y Ecologistas en Acción.

Según datos de Ecologistas en Acción, un campo de golf de 18 hoyos como el que se pretende construir en Tres Cantos consume la misma cantidad de agua que una población de 10.000 habitantes. "La Declaración de Impacto Ambiental negativa del anterior proyecto mostraba claramente que no había suficiente caudal de agua reciclada para mantener un campo de 18 hoyos en 70 ha. No entenderíamos que ahora "apareciese" una declaración que encontrara caudal para 2 de 18 hoyos en 228 ha" alerta la plataforma tricantina. Además, continúa, "los campos de golf de estas características precisan de la aportación masiva de abonos, pesticidas e insecticidas, que acabarían contaminando toda la zona y sus acuíferos, con gran perjuicio para la flora y la fauna del



FOTO: AV TRES CANTOS

Acto informativo sobre el proyecto del campo de golf en la Casa de la Cultura de Tres Cantos, el 14 de mayo de 2010

>> La federación vecinal y las asociaciones de **San Blas, Vicálvaro, Coslada y San Fernando de Henares** piden la retirada del plan especial sobre el traslado del campo de fútbol del Atlético de Madrid a La Peineta, en San Blas. A pesar de que la operación triplicará el aforo del complejo deportivo, el Ayuntamiento no sólo no garantiza el transporte público y los accesos por carretera, sino que delega en el club la elaboración de un plan de movilidad. Las asociaciones temen que los días de partido la zona se transforme en un molesto y enorme caos.

>> **La Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU)** ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que instale fuentes públicas en las plazas de Juan Pujol, Carlos Cambroner, Guardia de Corps, Soledad Torres Acosta, en las glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez, así como en algunas áreas recién peatonalizadas, tales como la plaza de Callao, la Puerta del Sol o la calle Fuencarral, donde los vecinos reclaman, al menos, tres fuentes, que proponen situar a la altura del Museo Municipal, en la esquina con la calle Valverde y frente al mercado de ropa.

mayor pulmón verde, no sólo de Tres Cantos, sino de todo Madrid”, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Pese al enorme gasto energético que supone mantener un campo de golf en un lugar de clima continental como Madrid, en los últimos tres meses otros tres ayuntamientos de la Cuenca Alta del Manzanares (Guadarrama, Morlzarzal y Soto del Real), cercanos al futuro Parque Nacional del Guadarrama y que se encuentran en un radio de 50 kilómetros, han hecho pública su pretensión de construir este tipo de infraestructura. En la zona sur, San Martín de la Vega ha sido el último municipio en sumarse a esta fiebre golfística: en febrero firmó un protocolo con la Federación Madrileña de Golf para construir un campo de 54 ha y 18 hoyos.



Foto: AV Tres Cantos

Una buena parte del vecindario del municipio se opone a la construcción de la infraestructura deportiva.

Las asociaciones de Usera sacan tarjeta roja al concejal del distrito

El afán recaudatorio del ayuntamiento más endeudado de España tiene una nueva víctima: el fútbol base de Usera. A pesar de carecer de fines de lucro y de haber recibido tres campos municipales en condiciones muy precarias, el Consistorio ha comenzado a reclamar a las AAVV Zofío, La Chimenea y La Mancha el pago del suministro de agua, luz y gas, lo que puede ahogar sus escuelas deportivas. En Orcasur, por su parte, después de 30 años de gestión asociativa de las instalaciones, el Ayuntamiento ha concedido por primera vez la gestión del campo a una empresa privada.

Las nuevas medidas recaudatorias del Ayuntamiento de Madrid y la “intransigencia y falta de voluntad de diálogo” del concejal de distrito, Jesús Moreno, han impulsado a las asociaciones vecinales a desenterrar su hacha de guerra. Y, a tenor de las palabras de Piedad Martínez, presidenta de la AV Orcasur, no la enterrarán “hasta que el Ayuntamiento nos de una solución definitiva y podamos garantizar la práctica del deporte de los cientos de niños que usan nuestras instalaciones”. “Y si es necesario -continúa- nos encerraremos en el campo de fútbol y perseguiremos a los responsables políticos allí donde vayan”.

Durante 30 años, la entidad vecinal ha gestionado el campo de fútbol municipal Maris Stellae, en el que entrenan semanalmente 300 niños y jóvenes de familias modestas. Pero hace unas semanas, para sorpresa de propios y extraños, el Consistorio, tras convocar un concurso público en el que la asociación competía con una empresa privada, adjudicó su gestión a la segunda. “Esto no lo vamos a consentir. El Ayuntamiento no se ha gastado nada de dinero en el campo. Toda la inversión ha sido realizada por la asociación, pero claro, ahora que el terreno tiene césped artificial, algo que arrancamos

a la Comunidad de Madrid, por primera vez saca a concurso su gestión y se lo da a una empresa que no tiene experiencia en el barrio”, sostiene Martínez, antes de remachar: “el Ayuntamiento piensa más en hacer caja que en fomentar el deporte base, a pesar de que la vida social de los barrios se sustenta en este tipo de actividades”. Con la entrada en el barrio de la empresa Palestra, que atesora numerosas concesiones de instalaciones deportivas del Consistorio, la asociación teme que empeore el servicio y da por seguro un incremento de los precios. “Ahora cobramos unos 100 euros

>> Las carencias en el ámbito de la educación madrileña son cada vez mayores en la Comunidad, como ponen de manifiesto las cada vez más recurrentes movilizaciones de AMPAs y AAVV. En **Vicálvaro**, estas entidades protestan actualmente por la supresión de la ruta escolar y las ayudas de comedor en el CEIP Doctor Severo Ochoa, mientras en **Arganzuela** reivindican la construcción urgente de un instituto público de secundaria. Para este fin, el 14 de junio organizaron una colorida y exitosa marcha ciclista.

>> Las miles de familias afectadas por un presunto delito de estafa en los desarrollos del Sureste de Madrid, que están organizadas en entidades como la **AV Madrid Sur**, después de varias manifestaciones recibieron a finales de junio una buena noticia: los juzgados han admitido a trámite la querrela interpuesta contra Ofigevi, HCC Europe y los bancos, cajas y seguros implicados en la venta de unas viviendas por las que han desembolsado entre 40.000 y 70.000 euros y aún no han sido empezadas.

al año por usuario, pero cuando el campo se privatice los precios subirán por encima de los 500 euros, lo que provocará que muchos chavales abandonen la actividad deportiva ya que la mayoría provienen de familias con muy pocos ingresos”, resume la dirigente vecinal. Una parte de los jóvenes que usan las instalaciones del Maris Stella proviene de los Servicios Sociales.

“Nos parece increíble que a la vez que el Ayuntamiento firma unos planes especiales de inversión que incluyen la creación de escuelas deportivas con las asociaciones, nos quite la gestión de equipamientos en los que llevamos toda la vida”, subraya la presidenta de Orcasur. Un grupo de vecinos y vecinas de este barrio hizo pública esta contradicción el pasado 16 de junio, en el marco de una visita que realizó Ruiz-Gallardón con objeto de conocer las nuevas instalaciones del Centro de Formación de Oficios de Usera, cuya construcción forma parte de las actuaciones del Plan de Inversión Territorial de Usera. Los manifestantes recibieron al munícipe con carteles con la rúbrica “Tarjeta roja al Ayuntamiento de Madrid. No a la privatización del campo Maris Stella”. Tras el acto, Gallardón mantuvo una reunión informal con la presidenta de la AV de Orcasur en la que se comprometió a buscar una solución al problema. También se vio obligado a escuchar las quejas de los vecinos y vecinas contra el concejal del distrito, Jesús Moreno, alguien que “nos hace la vida imposible y no cesa de acosar a las asociaciones vecinales”, en palabras de Martínez.



Foto: AV Orcasur

Recibimiento de vecinos de Orcasur a Gallardón el 16 de junio de 2009



Varias decenas de personas se manifestaron por las calles de Usera el 24 de marzo de 2010.

Piedad Martínez: “el Ayuntamiento piensa más en hacer caja que en fomentar el deporte base, a pesar de que la vida social de los barrios se sustentan en este tipo de actividades”.

Todas las entidades ciudadanas de Usera comparten la opinión de la asociación de Orcasur respecto a Moreno. Según Francisco Rodríguez, presidente de la AV Barrio Zofío, “hay una falta de diálogo total con el concejal, que siempre se niega a reunirse con nosotros, en una clara política de acoso y derribo de la junta del distrito contra el movimiento vecinal. Lo de los campos de fútbol no son hechos aislados, forman parte de un intento de cargarse al movimiento vecinal”.

Al problema del Maris Stellae se suma el de otros tres terrenos de juego de Usera gestionados por las AAVV Barrio Zofío, La Chimenea y La Mancha. En agosto de 2009 el Ayuntamiento cedió a estas entidades, en condiciones notablemente precarias, unas instalaciones en las que entrenan regularmente más de 1.400 deportistas de entre 6 y 18 años. Siete meses después, a pesar de que los tres colectivos entregaron 5.000 euros en concepto de canon y seguro de responsabilidad civil y gas-

tan mensualmente 3.500 euros en salarios de personal y servicios de limpieza y mantenimiento, el Consistorio les envió una carta en la que, a partir de ese momento, las obligaba a hacerse cargo de los elevados costes de agua, luz y gas de las instalaciones deportivas. “Nos entregaron unos campos en pésimas condiciones en los que, con mucho esfuerzo por parte de las asociaciones vecinales, entrenan más de 1.400 chavales que sólo pagan entre 150 y 200 euros anuales. Con ese dinero, les proporcionamos los equipajes, la ropa de entrenamiento, una bolsa, la formación deportiva y el uso de las instalaciones. El Ayuntamiento -señala- no puede cargarnos ahora con una nueva factura que rondará entre 1.800 y 2.000 euros mensuales porque, sencillamente, supone la asfixia económica de nuestras asociaciones que, no olvidemos, son entidades sin ánimo de lucro”, sentencia el presidente de Zofío.

Para protestar contra una medida que las asociaciones consideran “injusta y meramente recaudatoria”, decenas de vecinos se manifestaron el 24 de marzo en Usera. De momento, las entidades afectadas se niegan a pagar las nuevas partidas exigidas por el Ayuntamiento, cuyo concejal de Coordinación, José Manuel Berzal, ha prometido estudiar la petición vecinal. “La pelota está ahora en el tejado de Berzal. Nosotros estamos abiertos a una solución, pero que no implique un sobrecoste a lo que venimos soportando”, concluye Francisco Rodríguez.

>> Decenas de vecinas y vecinos que llegaron a Hortaleza procedentes de Marruecos, Brasil o Argentina o que hace ya varias décadas emigraron a Francia o Alemania en busca de mejores condiciones de vida han compartido sus experiencias migratorias en la web www.hortalezamigra.org y en un documental, gracias al impulso de la **AV Villa Rosa** y la asociación Atarraya, que juntas buscan promover la cohesión social y la convivencia intercultural e intergeneracional en el distrito.

>> Después de años de una pelea que se había intensificado a finales de 2009 con la recogida de miles de firmas, reclamaciones y quejas de los usuarios y manifestaciones de protesta, el vecindario de **Aluche** (Latina), con su asociación vecinal a la cabeza, ha conseguido por fin el compromiso del Gobierno regional de construir un nuevo centro de salud que sustituya al actual de la calle Maqueda. Para celebrarlo, la AV de Aluche, tras una manifestación, colocó en febrero la primera piedra de un centro ganado a pulso.

Los malos humos de Valdemingómez inundan Villa de Vallecas

En la mayoría de los barrios la llegada del verano es recibida con alborozo. En el PAU de Vallecas no. Allí, cuando arrecia el calor, el vecindario tiene que elegir entre cerrar las ventanas y resistir las altas temperaturas -o activar el aire acondicionado- o abrirlas y dejarse inundar por los olores pestilentes que provienen de Valdemingómez. Las asociaciones vecinales del distrito reclaman soluciones a una situación cada vez más insostenible.

“Los olores son lo que percibimos, pero estamos seguros de que las emisiones pueden tener efectos perjudiciales para la salud, algo que no podemos corroborar pues no tenemos constancia de la realización de estudios epidemiológicos relacionados con este asunto”, indica Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos PAU-Ensanche de Vallecas. Esta entidad, junto a las asociaciones vecinales del distrito Villa de Vallecas La Unión y La Colmena, organizó el pasado 12 de junio una manifestación por las calles del nuevo desarrollo urbanístico para exigir una “solución urgente a los malos olores”. No era el primer acto de estas características. El 25 de abril, los tres colectivos aprovecharon la celebración del tradicional Día de la Tortilla para, ataviados con mascarillas, “reclamar nuestro derecho a respirar un aire sano y limpio”.

Los hedores, que por cercanía afectan de manera especial al ensanche vallecano, provienen de la única planta de compostaje de la central de Valdemingómez que continúa a cielo abierto, la instalación de Las Lomas, así como de la quema de determinados residuos. El Ayuntamiento de Madrid, responsable del vertedero, selló hace unos años las otras dos plantas donde se pro-

Las tres AAVV de Villa de Vallecas han prometido manifestarse cada dos meses a partir de septiembre si el problema persiste. Reclaman el cubrimiento de la planta de compostaje de Las Lomas, origen de los olores.



Concentración vecinal en el PAU-Ensanche de Vallecas.

cesan los residuos orgánicos y ahora los colectivos vecinales exigen que haga lo propio con Las Lomas.

Aunque el problema de los olores viene de lejos, fue en noviembre de 2008 cuando la asociación del PAU puso en marcha, a través de su página web, un dispositivo de recogida de datos con objeto de demostrar a la administración municipal un problema que negaba. En este tiempo, la entidad ha recopilado más de 700 formularios en los que los vecinos no sólo han indicado el lugar, el día y la hora en la que han detectado los hedores sino también su intensidad y tipología. De los tres tipos de olor existentes, “aceite”, “quemado-ceniza” y “fecal-basura”, es este último el que se repite con mayor frecuencia. Según la asociación vecinal, los malos vapores inundan el nuevo barrio, que ya cuenta con 20.000 habitantes, al menos la mitad de los días de cada mes, un problema que se agrava en la época estival. “Hay noches en las que no tienes otro remedio que cerrar las ventanas, pues el olor es insufrible”, sostiene la presidenta de la entidad, que junto a las otras dos asociaciones vecinales del distrito ha

prometido manifestarse cada dos meses hasta que se resuelva esta situación.

Ante la insistencia vecinal, el pleno de la Junta Municipal del mes de marzo aprobó una propuesta de los tres colectivos que insta al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para solucionar el problema, algo a lo que se comprometió hace cuatro años. En concreto, afirma Rosa María Pérez, “proponemos la ejecución de un estudio olfatométrico en la zona y el recubrimiento de la planta de compostaje de Las Lomas”. Si el Consistorio continúa mirando para otro lado, las asociaciones, además de incrementar su presión en la calle, se plantean “acometer un estudio olfatométrico independiente y elevar los resultados a las autoridades españolas y comunitarias”. Este informe se añadiría a las decenas de reclamaciones que los vecinos afectados han presentado al Defensor del Pueblo y que se encuentran en el origen del requerimiento realizado por esta institución al gobierno municipal para que adopte acciones urgentes que acaben de una vez con esta “situación insostenible”.

La FRAVM impulsa la movilización en los barrios ante los recortes sociales

A pesar de que los responsables de la recesión económica se mueven en esferas que nada tienen que ver con nuestros barrios, sus consecuencias las están pagando, en primer lugar, los vecinos y vecinas con menos recursos. En un contexto marcado por los recortes sociales y el aumento de las bolsas de precariedad, la federación vecinal impulsa en estos momentos la movilización en los barrios con iniciativas como la constitución de asambleas de parados y, de cara a la huelga general del 29 de septiembre con la creación de comités ciudadanos de apoyo.

Aunque la afirmación resulte redundante por su dolorosa evidencia, la crisis económica está afectando de manera sangrante y en primer lugar a las capas de población más humildes y con menos recursos, que son las primeras en engrosar las listas del paro. En junio, por segundo mes consecutivo, las cifras de desempleo se redujeron un 12,58% en el conjunto del Estado español y un ridículo 0,79% en la Comunidad de Madrid, un hecho que está lejos de marcar una pronta recuperación. Tal y como sostiene CCOO, este moderado descenso tiene un carácter estacional y se debe al aumento de las actividades de temporada en sectores como la construcción o los servicios. Además, no ha sido generalizado en la región ni ha afectado a las mujeres, sector donde el paro creció respecto al mes de mayo. Según datos del Ministerio de Trabajo, en términos globales el número de parados registrados en los Servicios Públicos en Madrid ha aumentado en los últimos 12 meses un 12,58%, lo que supone 52.629 personas más que hace un año y un total de 470.913 personas en junio. En virtud del informe "Dos años de crisis" de CCOO de Madrid, publicado el pasado mes de marzo, tras unos años de crecimiento económico y progresiva creación de empleo, "a partir de mediados de 2008 se empieza a destruir empleo y es en el año 2009 cuando se materializan los peores efectos, del tal forma que en los últimos dos años se han perdido 176.000 empleos netos, de los que 159.200, el 91% del total, han sido en este último año". Por grupos de edad, los jóvenes menores de 25 años son los más están sufriendo la recesión, hasta el punto que desde finales de 2007 "se ha destruido el 27,4%" del empleo ocupado por este sector, lo que representa "el 41% de todo el empleo destruido en los últimos dos años". Las mujeres y los inmigrantes son otros dos de los segmentos de la población especialmente castigados. "Durante 2009, con los peores efectos de la crisis, la destrucción de empleo más intensa se dirige hacia la población inmigrante, que son los que tienen generalmente una mayor precariedad laboral y es hacia donde se ha dirigido, en primer lugar, la reducción de las plantillas", destaca el informe sindical. Sobre estas reducciones, el documento subraya que

en estos dos años los Expedientes de Regulación de Empleo, "como vía de ajuste de las empresas", se han multiplicado por cinco.

Esta destrucción de empleo se ha producido de forma paralela a la aplicación de políticas de austeridad de las administraciones que, dictadas desde organismos supranacionales como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, están repercutiendo en primer lugar en los dispositivos sociales. Ministerios, consejerías y ayuntamientos, en una carrera enloquecida donde la improvisación parece haberse convertido en norma, no cesan de aprobar y aplicar recortes a sus previsiones y compromisos. El pasado mes de mayo, el consistorio más endeudado de España, el de Madrid, presentó un plan de ajuste del gasto de 1.041 millones, lo que afectará a inversiones que estaban presupuestadas por valor de 600 millones de euros (como el estadio de Vallehermoso o el plan de mejora ciclista) y a equipamientos públicos como escuelas infantiles, centros de día o polideportivos presupuestados en 200 millones. Pero el de Gallardón no es el único consistorio en apretarse el cinturón. Móstoles, por ejemplo, ha reducido en un 85% sus inversiones en obra pública, entre las que se encuentran unos siete millones para la rehabilitación de barrios, mientras que Alcorcón, al aplicar un taje-retazo de 45,5 millones, elimina de sus planes proyectos ya aprobados como una

escuela infantil, dos centros cívicos o el préstamo de bicicletas. Esperanza Aguirre, por su parte, unos días después de que el Congreso aprobara por la mínima el decreto-ley de medidas restrictivas para paliar el déficit público, anunció un "presupuesto austero para 2011", lo que se añade a los recortes que se han producido este año en sectores estratégicos como educación, transporte o sanidad, y que están en la base de protestas laborales que, como la huelga de metro, han catapultado el malestar de los trabajadores a la primera plana de la actualidad mediática.

Observatorio de la Crisis en los Barrios

Preocupada por una realidad que atraviesa con virulencia nuestros barrios, la FRAVM, a través del miembro de su Junta Directiva Vicente Pérez Quintana, elaboró en octubre de 2009 el informe "Crisis, estado de la situación", que tras repasar las causas y consecuencias de la recesión en la mayor parte de los sectores productivos, en el consumo y en la economía familiar, aborda las "ineficaces e injustas" medidas de choque puestas en marcha por el Gobierno y una serie de propuestas alternativas. Entre éstas, una "mejora de la progresividad del sistema impositivo español", lo que pasa por "operar sobre los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, sociedades, etc.,



La FRAVM convoca a las asociaciones vecinales a una asamblea el 16 de septiembre para preparar la huelga general del 29 de septiembre y favorecer su éxito.

así como sobre determinados aspectos del IRPF: gravamen de las rentas de capital, deducciones y reducciones en las cuotas y las bases, escala de tipos según tramos de la renta...”

Junto a esta investigación, la Federación activó un dispositivo de recogida de datos a pie de calle, el Observatorio de la Crisis en los Barrios, que hasta el momento ha parido un documento sobre cómo está afectando la recesión y los recortes en 18 de las zonas más desfavorecidas de la capital. El informe fue publicado en diciembre de 2009 y la situación no ha hecho más que empeorar desde entonces, como podemos observar cada día: las oficinas de empleo están abarrotadas, los conflictos laborales por despidos o reducciones salariales se reproducen, la economía informal se hace cada vez más visible en forma de puestos callejeros, etc. Según el Observatorio, en distritos como Villaverde, Carabanchel, Latina, Usera, Tetuán o Puente de Vallecas, el aumento del desempleo y del número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social no está siendo acompañado de un refuerzo de los dispositivos sociales dependientes de las administraciones, muchos de los cuales se encuentran saturados. Es más, a menudo sucede lo contrario: el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid han cerrado o reducido al mínimo servicios que sirven para atenuar desigualdades entre la población, como es el caso de la supresión, casi completa, de los Centros de Atención Social a Inmigrantes, de tal forma que mucha población de origen extranjero se ha quedado sin su referente inmediato y directo en servicios sociales. En Villaverde y Lucero (Latina), por poner otros ejem-

Un número importantísimo de organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan labores de integración social han visto reducidas o eliminadas las ayudas económicas que percibían de las administraciones.

plos, se han producido recortes y retrasos importantes en teleasistencia y asistencia domiciliaria a mayores, mientras en educación la consejería ha suprimido varias rutas escolares y ayudas de comedor (Valdebernardo). Todos los observadores han constatado también un aumento de las personas que acuden a servicios de inserción socio-laboral y de los parados de larga duración.

Por otro lado, en la totalidad de los lugares observados un número importantísimo de organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan labores de integración social han visto reducidas o eliminadas las ayudas económicas que percibían de las administraciones, hasta el punto de que algunos proyectos e incluso entidades se han visto obligadas a echar el cierre. Las asociaciones vecinales y su federación, que también han visto reducidas las ayudas procedentes del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional, denuncian que se está dejando de financiar proyectos de agrupaciones muy enraizadas en los barrios, como el Secretariado Gitano, la asociación Puerta Abierta o el Albergue San Fermín, a la vez que se derivan importantes ayudas a entidades sin ningún arraigo territorial ni experiencia en intervención social.

Huelga general

Por si esto fuera poco, el Gobierno, con el rechazo de los sindicatos, ha iniciado la tramitación parlamentaria de una reforma laboral que aumentará la desprotección de la clase trabajadora. Y en medio de todo este maremoto, ¿dónde quedan las asociaciones vecinales? La FRAVM lo tiene claro: su receta, como siempre, pasa por colocarse del lado de los que más sufren las consecuencias de la crisis, fomentando la movilización en la calle, la presión ante las administraciones, la organización de los afectados y la unidad de acción. La recomendación no es nueva, y hoy se concreta en la promoción de iniciativas como asambleas de parados en los barrios y en el apoyo a los trabajadores en sus conflictos laborales, como ha sucedido durante las huelgas en Metro de Madrid o en la recogida de basuras. Respecto a la huelga general del próximo 29 de septiembre anunciada por los sindicatos, la FRAVM no sólo la apoya sino que se ha puesto a “trabajar intensamente para que sea un éxito de participación”, como indica la Junta Directiva de la organización en un llamamiento realizado a principios de julio en el que convoca a las AAVV a una asamblea “a celebrar el 16 de septiembre para que intercambiamos información y acordemos nuevas iniciativas a seguir, a la vez que expresamos nuestra total oposi-

Esta destrucción de empleo se ha producido de forma paralela a la aplicación de políticas de austeridad de las administraciones que, dictadas desde organismos supranacionales como el Banco Central Europeo, están repercutiendo en primer lugar en los dispositivos sociales.

ción a las decisiones de recorte que están tomando la Administración central y también la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, con el de Madrid en primer lugar”. Unas decisiones, según la FRAVM, que “significan la destrucción del Estado de Bienestar, ya de por sí bastante débil. Se reduce la atención a las personas dependientes, se suprimen rutas escolares, se suspende la construcción de nuevos centros de salud, bibliotecas, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, se anulan las ayudas a la cooperación al desarrollo, se disminuyen los fondos destinados a las políticas de integración de los inmigrantes y mejora de la convivencia, se retrasa indefinidamente la concesión de ayudas a la rehabilitación de viviendas, se degrada la prestación de servicios como la recogida de basuras y bomberos... En cambio, suben el precio del transporte público y de suministros de primera necesidad como el gas y la electricidad, suben el IVA y otros impuestos como el IBI...”. “Todo ello -continúa- justifica sobradamente la convocatoria de huelga general realizada por los sindicatos para el 29 de septiembre. La FRAVM llama a las asociaciones vecinales a sumarse a la misma aportando nuestras reivindicaciones y nuestra oposición a los recortes. Creemos que la huelga no es un acto que implica únicamente a quienes tienen un trabajo, sino que también importa al resto de la población, desde los pensionistas hasta los estudiantes, pasando por la población desempleada, las personas que hacen trabajo doméstico...” Por todo ello, invita a las AAVV a “organizar en los distritos y municipios plataformas unitarias de apoyo a la huelga general en las que se podría acordar la creación de piquetes informativos el día de la huelga en nuestros barrios”. Por último, anima a las entidades federadas “a convocar actos públicos y asambleas informativas en las que explicar a los vecinos y vecinas los motivos de la movilización y la necesidad de que entre todos y todas nos opongamos a las políticas de destrucción del Estado de bienestar”.

Maribel Domèneq, portavoz de la Plataforma Salvem el Cabanyal de Valencia.

“Rita Barberá quiere que el barrio se caiga y dar un castigo ejemplar a los vecinos”

En abril de 2010, el Ayuntamiento de Valencia derribó cuatro casas desoyendo la orden del Ministerio de Cultura de salvaguardar el conjunto histórico que representa El Cabanyal. El Supremo obligó a Rita Barberá a parar esta intervención y, desde entonces, el barrio disfruta de una cierta tranquilidad. Han cesado los derribos, imprescindibles para ejecutar un plan municipal que busca partir en dos el barrio con una gran avenida, pero también se han anulado las licencias de obra para la rehabilitación de la zona, y los vecinos sienten que se les ha abandonado a su suerte .

Por Patricia Horrillo

Gaceta Vecinal: Después de tantos años de conflicto con el Ayuntamiento de Valencia, ¿qué ocurrió el 6 de abril para que saltara la chispa?

Maribel Domèneq: El 6 de abril salió publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana una ley aprobada por las Cortes de la Comunidad que desoía la orden ministerial de salvaguardar El Cabanyal. Ese mismo día, las máquinas se metieron en el barrio y empezaron los primeros derribos, que intentamos frenar entre todos. También se personaron vecinos de la ciudad de Valencia y políticos de todas las fuerzas de izquierdas. Hubo una movilización muy importante y se produjeron los primeros desalojos. Todo fue muy rápido porque el Consejo de Estado informó enseguida de la inconstitucionalidad de esta ley y el Tribunal Constitucional admitió a trámite la denuncia de manera inmediata. Así se evitó que continuaran derribando casas.

G.V.: ¿Cómo se encuentra actualmente el barrio?

M.D.: En este momento, los derribos están paralizados. Pese a que nos decían que era posible que no pudieran ejecutar el proyecto aprobado por el Ayuntamiento, conocíamos los riesgos. Ahora estamos satisfechos ya que los dos recursos que ha presentado el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional, con el fin de que se derogara la orden ministerial hasta que dicte sentencia, han sido respondidos con mucha contundencia. El que no se pueda proseguir con ningún derribo nos da una cierta tranquilidad, porque desde enero hasta hace poco hemos vivido una auténtica crisis, con fuertes amenazas sobre los vecinos y sobre el propio barrio.

G.V.: ¿Cuál fue la respuesta del Ayuntamiento a ese parón en los derribos?

M.D.: Los días siguientes a las demoliciones, desde la Comisión de Urbanismo se intentó seguir aprobando licencias de derribo incluso de casas que no eran propiedad del Ayuntamiento, y pese a que no se pudieran ejecutar. En este momento sabemos que hay licencias de derribos de casas que son propiedad de vecinos, que no están ni compradas ni vendidas por el Ayuntamiento. Nos parece el acto de abuso más fuerte que ha continuado haciendo el Consistorio. Lo hemos denunciado porque conside-

ramos que la concesión de estas licencias es ilegal y deben ser anuladas.

G.V.: ¿Qué lectura hacéis de este tipo de acciones del Ayuntamiento?

M.D.: Es una amenaza terrible y flagrante sobre los propios vecinos de El Cabanyal, que demuestra una clara intencionalidad. Un ayuntamiento tiene poder legítimo para otorgar licencias de derribo siempre y cuando sean de edificios propios. Pero, claro, no puede decidir sobre la propiedad particular de otras casas. Sin embargo, aprobaron todas las licencias de la calle de San Pedro, la más antigua de El Cabanyal, por-



FOTO: EVA MANÍEZ-DIAZONAL



Foto: EIA MANÉZ-DIAZONAL

9 de abril de 2010. El vecindario se echa a la calle para detener el avance de las máquinas de derribo.

El que no se pueda proseguir con ningún derribo nos da una cierta tranquilidad, porque desde enero hasta hace poco hemos vivido una auténtica crisis, con fuertes amenazas sobre los vecinos.

que quieren construir un bulevar. Allí es donde mayor número de casas protegidas existía, y este Ayuntamiento ha convertido la zona en la más degradada del barrio.

G.V.: ¿En qué situación se encuentra el pulso legal para defender El Cabanyal?

M.D.: Ahora está todo en manos del Constitucional, después de que el Gobierno presentara unos recursos de inconstitucionalidad de la ley que se aprobó en las Cortes valencianas para poder realizar los derribos. Además, se solicitó un informe específico al Consejo de Estado por el que el Tribunal Constitucional decidió parar estas intervenciones. Así que, en estos momentos, la ley que pretendían poner en marcha no puede afectarnos.

G.V.: ¿Cómo ha sido y es la relación con el Ayuntamiento?

M.D.: Siempre ha sido nuestra prioridad dialogar con el Ayuntamiento y darle a conocer nuestra situación. Pero desde hace doce años, la alcaldesa Rita Barberá no nos ha querido recibir jamás. El 5 de enero, cuando salió la orden ministerial, escribimos una carta para reunirnos y hablar con ella del nuevo escenario. Pero su respuesta ha sido la paralización total. Ha anulado todas las licencias de derribos y no se conceden licencias de obras, pese a los 700.000 euros de ayudas aprobadas para la rehabilitación. No quiere dar ni una sola oportunidad al barrio. Tiene la voluntad de que esto se caiga por sí mismo. Quiere establecer un castigo ejemplar para los vecinos de El Cabanyal. El único problema que tiene este barrio es que somos la playa de Valencia, y lo que

Lo único que queremos es vivir con la misma dignidad y los mismos equipamientos sociales, educativos y sanitarios que tiene cualquier otro barrio de Valencia.

ella pretende es su conquista, con una impunidad y un empoderamiento injustificados en una democracia. Lo único que queremos es vivir con la misma dignidad y los mismos equipamientos sociales, educativos y sanitarios que tiene cualquier otro barrio de la ciudad.

G.V.: ¿Cuál es el planteamiento de la Plataforma Salvem el Cabanyal de cara al futuro?

M.D.: Tenemos que esperar a que salga la sentencia de la Audiencia Nacional, en cuanto a la aprobación, o no, del proyecto urbanístico de la zona. Pero no nos vamos a quedar simplemente esperando a esta decisión judicial. Hay muchísimas actividades que podemos desempeñar. Hemos decidido defender este barrio desde el mundo de la cultura. Este año lo vamos a dedicar al cómic, con exposiciones de diseñadores y dibujantes. También habrá actividades en la calle con graffiteros, para hacer grandes murales que dignifiquen la zona.

Y continuaremos manteniendo las dos vías que hemos llevado hasta ahora: la judicial, hacer visible y denunciar actos que exceden el derecho, y la social, a través de movilizaciones ciudadanas desde la cultura.

2.000 imágenes para celebrar una historia cargada de futuro

Organizada de forma conjunta por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la FRAVM, la exposición “Madrid-Barcelona. 40 años de acción vecinal”, que ya ha recalado en el Museo de la Ciudad de Madrid, Coslada, Fuenlabrada y Leganés, ha servido para celebrar en los últimos meses y por todo lo alto las cuatro décadas de existencia del movimiento ciudadano. A partir de septiembre, siempre de la mano de las asociaciones federadas, la muestra viajará a San Fernando y a varios distritos de la capital.



La guerra del pan, uno de los hitos del movimiento ciudadano de Madrid.

La exposición, que puede visitarse en su totalidad en el sitio web

www.memoriavecinal.org, recoge 1.133 imágenes de la historia del movimiento en la región de Madrid.

Entre 1968 y 1970, al amparo de la Ley de Asociaciones de una dictadura que agonizaba, se crean las primeras asociaciones vecinales en Madrid y en Barcelona. En su origen se hallan necesidades tan básicas como el agua corriente, un consultorio médico, alcantarillado, una escuela o un medio de transporte público que conectase el barrio con el centro. Pero también los anhelos de justicia y libertad y el deseo de construir comunidad en democracia. Aprovechando los resquicios legales que permitía el régimen, con el fantasma de la represión rondando en cada reunión, en cada acto público, estos colectivos sacaron a la luz las enormes carencias de los barrios para, poco a poco, con la presión en la calle y la negociación en los despachos, transformarlos en espacios mucho más habitables y humanos.

Muchas cosas han cambiado desde aquellos años en los que los nuevos vecinos llegados de pueblos de Castilla, Andalucía o Extremadura se instalaron en la periferia de la capital, formando enormes asentamientos de barro y chabolas como Orcasitas, El Pozo o Torregrasa. Lejos queda la lucha colectiva que los convirtió en barrios urbanizados y con viviendas dignas, lejos la batalla por conseguir agua corriente en Parla o Móstoles, la defensa de La Vaguada del Barrio del

Pilar o la Guerra del Pan. Muchas cosas han cambiado desde entonces, como también lo han hecho los colectivos que, como el vecinal, propiciaron la enorme transformación vivida en nuestros pueblos y ciudades en estos cuarenta años. Y, sin embargo, como demuestra el hecho de que cada año surjan nuevas asociaciones vecinales, este movimiento sigue teniendo hoy plena vigencia. Con esta perspectiva, que se aleja de cualquier "ejercicio de nostalgia y trata de reivindicar el compromiso de transformación de la realidad" en palabras de Ignacio Murgui, hace más de un año la organización que preside y la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB) se pusieron en marcha para gestar un proyecto único de recuperación de la memoria vecinal.

En un marco de enorme sintonía entre las dos federaciones, reunión tras reunión la idea fue tomando forma y se hizo carne en una exposición fotográfica basada en soportes audiovisuales. Hicieron falta meses de recopilación, selección y tratamiento de documentos, un arduo trabajo que, más allá de la exposición, ha dado lugar en Madrid a un archivo digital -aún desorganizado y siempre incompleto- compuesto por más de 25.000 documentos, fotografías, boletines, carteles y recortes de prensa en su mayoría.

Pero más importante que el resultado, una vez más, ha sido el proceso. "Como no podría ser de otra manera, [la exposición] ha ido construyéndose al modo en que construye el movimiento vecinal su historia: colectivamente, desde abajo. Juntando muchos pocos y poco muchos. Reuniendo las aportaciones que han ido trayendo las asociaciones, y haciendo un ímprobo trabajo profesional y militante



FOTO: ÁNGEL ROJO

Inauguración de la exposición en el Museo de la Ciudad de Madrid. Francisco Caño, coordinador de la muestra, se dirige a los presentes ante el alcalde de Madrid y los presidentes de las federaciones vecinales de Barcelona y Madrid.

para darle forma, ordenarlo y presentarlo", indicó Murgui en la inauguración de la muestra en Madrid, que contó con la participación de Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo consistorio se encuentra entre las entidades que han financiado el proyecto. Las asociaciones que componen la FRAVM no sólo han cedido sus archivos para esta obra colectiva sino que, en un proceso horizontal tan propio de este movimiento, se encargaron de elegir, distrito a distrito y pueblo a pueblo, las "80 acciones vecinales" que junto a las "reclamaciones generales" y hechos históricos" organizan temáticamente la muestra.

La muestra, en palabras de Nacho Murgui, "se aleja de ser un ejercicio de nostalgia y trata de reivindicar el compromiso de transformación de la realidad" de las AAVV.



Inauguración de la exposición en Coslada.



El Ayuntamiento de Fuenlabrada acogió la muestra en el mes de abril.

Los trabajos de recopilación y digitalización de la muestra han dado lugar en Madrid a un archivo digital -aún desorganizado y siempre incompleto- compuesto por más de 25.000 documentos sobre la historia del movimiento vecinal.

La exposición, que puede visitarse en su totalidad en el sitio web www.memoriavecinal.org, recoge casi 2.000 fotografías. De ellas, 1.133 hacen referencia a batallas ciudadanas de la región madrileña. Juntas, conforman parte de "un camino, el del movimiento vecinal, hecho con esfuerzo, con sacrificios, con dedicación pero, sobre todo, con vocación colectiva. Una vocación militante cuya recompensa queda ampliamente reflejada en cientos, miles de pequeñas conquistas logradas golpe a golpe, barrio a barrio", en palabras de Francisco Caño, coordinador de la exposición. Conquistas como el hospital Severo Ochoa de Leganés, el cierre al tráfico de la Casa de Campo, la llegada del metro a Carabanchel, la regularización del Gran San Blas o la supresión de los cables de alta tensión en Latina que, junto a otras luchas menos conocidas como la oposición al campo de golf de Tres Cantos, la defensa de la Casa de la Casa de Baños de Tetuán o la supresión del paso elevado de Santa María de la Cabeza conforman, a través de fotografías, un relato complejo, multiforme y radicalmente constructivo.



La muestra recorre la historia del movimiento vecinal desde sus orígenes. En la imagen, el barrio de Orcasur

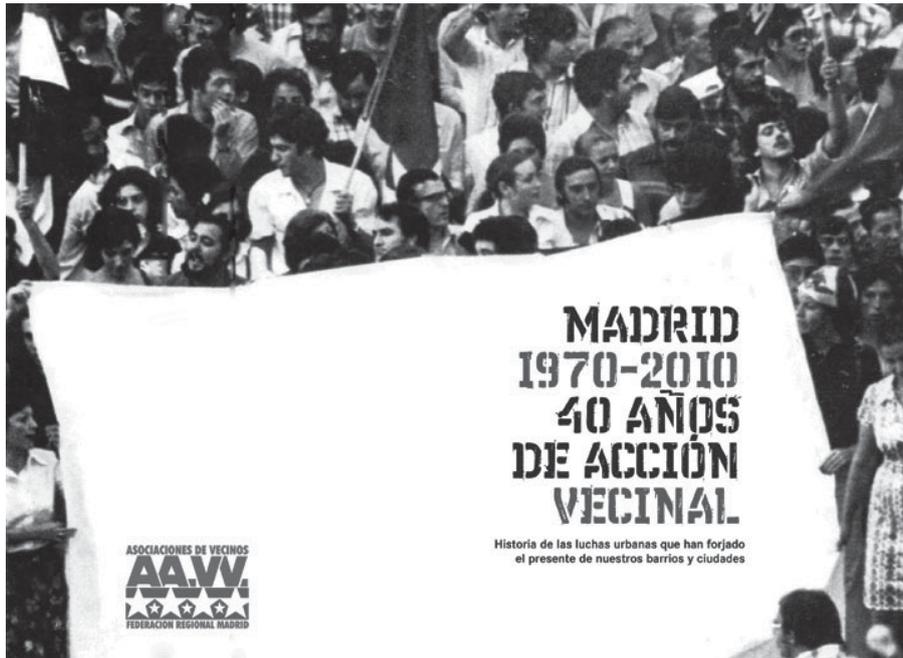
Tras arrancar de manera simultánea en los museos de la ciudad de Madrid y de Barcelona, donde se organizaron conferencias paralelas sobre la historia y los retos de futuro del movimiento vecinal, la exposición se trasladó a otros espacios menores. En la región madrileña, el centro cultural La

Jaramilla de Coslada acogió la muestra la primera quincena del pasado mes de abril, para trasladarse a continuación al hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde pudo visitarse hasta el 6 de mayo. Unos días después, recalaba en el centro cívico Julián Besteiro de Leganés, en el que tres municipios, además de organizar encuentros que reunieron a varias generaciones de activistas ciudadanos, dando un mayor peso a la muestra, las asociaciones vecinales confeccionaron y expusieron paneles con fotografías sobre la historia local del movimiento. Para ello, no sólo contaron con las entidades federadas en la FRAVM sino que lo hicieron extensivo a otros exponentes de este movimiento social.



Las mujeres, protagonistas de una historia absolutamente desconocida para muchos.

Tras abandonar Leganés, la exposición recalará en agosto en la asociación vecinal La Corrala durante las fiestas de San Lorenzo y San Cayetano de Lavapiés, antes de pasar, en otoño, a San Fernando de Henares y a los distritos capitalinos de Hortaleza y Moratalaz. El coordinador de la muestra recuerda que aquellas asociaciones federadas que deseen organizarla en su distrito pueden comunicarlo a través del correo electrónico fravm@aavvmadrid.org



330 páginas de memoria ciudadana

Junto a la exposición, que en estos meses ha sido visitada por centenares de personas, muchos escolares entre ellas, la FRAVM ha editado un cuidado libro que recoge 377 de sus fotografías: "Madrid. 40 años de acción vecinal". Las imágenes repasan las 80 batallas ciudadanas de la muestra. María Rocés, responsable de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, es la encargada de introducir las 56 acciones relativas a los distritos capitalinos, mientras que Prisciliano Castro, presidente de la FRAVM durante 17 años, hace lo propio con las 26 batallas de los municipios. Junto a estas luchas, el libro despliega en cinco capítulos una serie de temáticas y acontecimientos históricos que atraviesan y configuran este movimiento interclasista y plural. En este bloque, las imágenes de cada capítulo son precedidas de textos de diferentes expertos y aportaciones de dirigentes vecinales y de otros movimientos cercanos. Los arquitectos José Marino y Pedro González introducen el capítulo sobre urbanismo y vivienda, el secretario general de CCOO de Madrid, Francisco Javier López Martín, el relativo a la relación entre el movimiento vecinal y el sindical y la presidenta de MPDL e histórica colaboradora del movimiento vecinal Francisca Sauquillo, el capítulo sobre la "lucha por la democracia". Begoña San José, presidenta del Forum de Política Feminista, se encarga de presentar la parte que hace referencia a la batalla de las mujeres por la igualdad y Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir

Dignamente y ex secretario de la FRAVM, el capítulo sobre los "servicios públicos". El catálogo, que se cierra con el sugerente texto "Cuarenta y los que quedan", del responsable de Urbanismo y Vivienda de la federación madrileña, Vicente Pérez Quintana, se completa con sendas aportaciones del coordinador de la exposición y miembro de la junta directiva de la FRAVM, Francisco Caño, y de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, Eva Fernández.

De 330 páginas, el libro incluye también un DVD que recoge las más de 1.200 imágenes relativas a la Comunidad de Madrid de la exposición "Madrid-Barcelona. 1970-2010.

40 años de acción vecinal". "Esta ha sido una historia construida a pulso. Una historia de 14.610 días con sus noches de reuniones, pegadas de carteles hasta la madrugada, pequeñas y grandes conquistas, de asambleas, de patearse los despachos y las calles, de sueños y pesadillas, de esfuerzos, sacrificio...pero también de enormes satisfacciones, camaradería, conquistas y superación colectiva. 14.610 días que dan fe de la capacidad de las personas para transformar la realidad, una capacidad que se ha plasmado en nuestras calles, que se ha concretado en bibliotecas, parques, centros de salud, polideportivos, equipamientos culturales", resume Nacho Murgui en la introducción del volumen.



Paneles sobre la historia del movimiento vecinal de Leganés en el centro cívico Julián Besteiro de la localidad.

Una vez clarificadas las propuestas se inicia una segunda fase, que tiene por objeto establecer las prioridades de actuación a través de los planes especiales, siendo este momento de priorización el que comporta mayor complejidad y requiere mayor esfuerzo de las partes implicadas en el proceso de elaboración. La priorización conlleva la renuncia de unos en beneficio de otros y tiene por objeto lograr un acuerdo equilibrado en las actuaciones a

acometer en cada distrito, de modo que el plan especial de inversiones beneficie a todos los sectores sociales y a todos los barrios del mismo y, en concreto, a aquellos más desfavorecidos, con el fin de avanzar en el reequilibrio territorial y social de nuestra ciudad, al mismo tiempo que, dentro de cada uno de los distritos, el plan especial debe procurar ese mismo propósito de reequilibrio.

En la misma línea señalada, para el seguimiento de los

planes especiales se constituyen las correspondientes comisiones ciudadanas de seguimiento, integradas por las asociaciones de vecinos del distrito que hayan participado en su elaboración, representantes de la FRAVM y de la propia junta municipal del distrito, así como el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana que, a través de la dirección general de participación ciudadana, asume las labores de coordinación.



FOTO: AYUNTAMIENTO DE MADRID

Cierre P.E.I. 2004/2008-09



SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA 5 DE METRO entre Campamento y Empalme